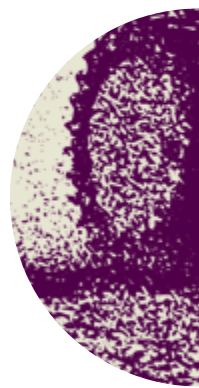




7

**Empleo, ingresos
y vulnerabilidad
en el mundo rural**



Mensajes clave

Aunque la pobreza rural ha disminuido en las últimas dos décadas, los hogares, sobre todo, los agrícolas, siguen expuestos a una alta vulnerabilidad debido a la informalidad y la baja diversificación de las fuentes de ingresos.

En las últimas dos décadas la tasa de pobreza rural en América Latina y el Caribe se redujo a la mitad, pero todavía duplica la urbana y afecta a uno de cada tres pobladores rurales.

Los hogares rurales son heterogéneos: no todos son agrícolas, pero los hogares que dependen del sector agropecuario de forma independiente enfrentan los mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad.

Muchos hogares rurales vulnerables y, dentro de ellos, particularmente las mujeres destinan una parte significativa de su tiempo a la producción de subsistencia. Si bien esta producción asegura una base mínima de sustento, también incrementa la vulnerabilidad de estos hogares frente a choques productivos y climáticos, reforzando las desventajas.

El empleo rural está en transición. Por primera vez, menos de la mitad de las personas trabajan en el agro, mientras que el empleo no agropecuario gana terreno. Sin embargo, la informalidad alcanza a dos tercios de los ocupados y los salarios rurales siguen rezagados.

La pobreza rural se amortigua gracias a transferencias privadas, como remesas, y a transferencias estatales, aunque estas últimas todavía presentan limitaciones en cobertura, montos y acceso en áreas rurales y para grupos específicos.



Es necesario consolidar la protección social, ampliando las transferencias de ingresos y pensiones no contributivas con mayor suficiencia, mejor focalización y alcance efectivo a poblaciones indígenas y hogares en situación de aislamiento geográfico. Al mismo tiempo, resulta clave vincular la protección social con la inclusión productiva para impulsar la movilidad social.



La diversificación del empleo rural requiere apostar a sectores de alto potencial, tanto agropecuarios como no agropecuarios, y acompañarla con formación y políticas laborales alineadas con la demanda local y la transición productiva hacia actividades más sostenibles.



Reducir las desigualdades implica cerrar las brechas de género y etnicidad mediante la expansión de servicios de cuidado infantil, la inversión en infraestructura que ahorre tiempo, la inclusión financiera y políticas de empleo que integren a las mujeres y las poblaciones indígenas en trabajos de calidad.

Empleo, ingresos y vulnerabilidad en el mundo rural¹

Introducción

Las áreas rurales de América Latina y el Caribe (ALC) siguen siendo el escenario de profundas desigualdades. Aunque en las últimas dos décadas la pobreza rural se redujo a la mitad, aún afecta a uno de cada tres habitantes y su tasa actual duplica la de pobreza urbana. La falta de acceso a servicios básicos, la precariedad de la infraestructura y las oportunidades laborales más limitadas hacen que la vida en áreas rurales esté marcada por mayores riesgos y vulnerabilidades. Comprender cómo se ganan la vida las familias rurales y qué desafíos enfrentan es clave para diseñar políticas que reduzcan las desigualdades y amplíen sus oportunidades de desarrollo.

El sector agropecuario² ha sido históricamente el corazón de la economía rural y continúa siendo una fuente esencial de ingresos y empleo (Gáfaro et al., 2025). Millones de hogares dependen de las actividades en el agro, en su mayoría a través del trabajo independiente

en pequeñas unidades productivas. Este sector, sin embargo, combina baja productividad con altos niveles de informalidad, lo que deja a quienes dependen de él expuestos a la pobreza y a choques económicos o climáticos. Al mismo tiempo, menos de la mitad de los trabajadores rurales desempeñan hoy actividades agropecuarias, lo que refleja una transición hacia otras ocupaciones, que, si bien han ganado espacio, no siempre ofrecen condiciones de empleo de calidad.

Este capítulo actualiza y amplía la evidencia disponible sobre estos aspectos en el mundo rural. A diferencia de otros reportes que han abordado el empleo y las brechas urbano-rurales (Byerlee et al., 2008; Weller et al., 2016; Cicowiez et al., 2006), aquí se ofrece una caracterización detallada de las estrategias de sustento de los hogares rurales y de cómo estas han cambiado en el marco del proceso de transformación estructural que atraviesa la región. Para ello se utilizan indicadores

1 Este capítulo fue elaborado por Dolores de la Mata y Mariana Marchionni con la asistencia de investigación de Iván Albina y Juan Barnes.

2 A lo largo del capítulo, el término "sector agropecuario" o simplemente agro se emplea para hacer referencia a los sectores productivos que incluyen la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura.

armonizados de encuestas de hogares de CEDLAS (2025), la base más completa y consistente para el seguimiento socioeconómico en el tiempo, con información representativa de las áreas rurales y urbanas de 14 países de la región en el periodo 2003-2023.

El análisis muestra que el mundo rural es muy heterogéneo. No todos los hogares dependen del agro y, entre quienes lo hacen, las situaciones difieren. La mayor vulnerabilidad se concentra en los hogares con menos diversificación de ingresos, especialmente aquellos que dependen casi exclusivamente del trabajo agrícola por cuenta propia, caracterizado por bajos niveles de productividad. A esto se suma que la informalidad afecta múltiples actividades, no solo las agropecuarias, limitando el acceso a la protección social y perpetuando la precariedad laboral de la población rural.

En este contexto, los avances en la reducción de la pobreza conviven con desafíos persistentes que afectan de manera particular a los grupos más vulnerables del mundo rural, en particular a las mujeres y poblaciones indígenas. Esto exige políticas que no solo fortalezcan la protección social, sino que también impulsen la inclusión productiva.

El capítulo concluye discutiendo la necesidad de impulsar la diversificación del empleo hacia actividades con mayor potencial, fomentar la formalización laboral y asegurar que los sectores más rezagados del mundo rural accedan efectivamente a estas oportunidades. Esos son pasos clave para reducir la vulnerabilidad de esos hogares rurales y ampliar sus posibilidades de desarrollo.

Hogares rurales y su vínculo con el sector agropecuario

El proceso de cambio estructural en las economías de ALC ha transformado de manera significativa las estrategias y oportunidades de inserción económica de los hogares rurales. Lejos de ajustarse al estereotipo tradicional del hogar exclusivamente agrícola³, los hogares rurales hoy presentan una notable diversidad, no solo entre países, sino también dentro de estos.

En ese sentido, es útil distinguir entre los hogares agrícolas, que aquí se definen como aquellos en los que el jefe⁴ o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario, y el resto de los hogares rurales⁵. Actualmente, uno de cada cuatro hogares en promedio reside en zonas rurales de los países de ALC y el 44 % de ellos son agrícolas⁶. La figura 7.1 ilustra cómo se distribuyen los hogares rurales según esta clasificación.

3 De manera simplificada, el término “agrícola” se utiliza para referirse a los hogares, tal como se describe en el texto, y a los ingresos provenientes de dicho sector.

4 En este reporte, el término “jefe del hogar” se utiliza independientemente de su género para todas las personas de referencia en la unidad familiar y reconocidas como tal por los demás miembros. El uso del término en masculino genérico se hace simplemente por razones de legibilidad.

5 Esta definición es similar a la propuesta por Gáfaró et al. (2025), con una diferencia relevante: esos autores consideran como agrícolas a los hogares con al menos un miembro ocupado en el sector, mientras que aquí se adopta un criterio más restrictivo, basado en la ocupación del jefe o su cónyuge. Esta elección busca evitar la clasificación como agrícola de hogares cuyo vínculo con ese sector es tangencial (por ejemplo, aquellos donde el único miembro ocupado en agricultura es un hijo, que incluso podría ser empleado no remunerado) y se apoya en la idea de que la ocupación del jefe del hogar o su cónyuge refleja de manera más precisa el eje de su inserción económica. Más allá de esta distinción conceptual, la proporción de hogares clasificados como agrícolas no varía sustantivamente al aplicar estas definiciones alternativas.

6 Los países incluidos en el análisis integran la base CEDLAS (2025) y son aquellos con información representativa para zonas rurales a lo largo del periodo 2003-2023: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. El gráfico A.7.1 en el apéndice de este capítulo, disponible en la edición en línea del RED, muestra la participación de la población y de los hogares rurales en los totales nacionales que surgen de estos datos. Estos 14 países concentran aproximadamente el 80 % de la población rural de ALC, de acuerdo con estimaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade-División de Población de la CEPAL y DPNU, 2024). A lo largo del capítulo, los indicadores presentados corresponden al promedio simple de estos 14 países. La decisión de utilizar promedios simples, en lugar de ponderaciones por población, busca evitar que los resultados reflejen de manera desproporcionada la situación de los países más grandes en términos poblacionales. De hecho, solo Brasil y México en conjunto concentran el 55 % de la población rural total de esta muestra de países y el 65 % de la población urbana. Las áreas rurales se definen de acuerdo con los criterios adoptados por los institutos nacionales de estadísticas de cada país.



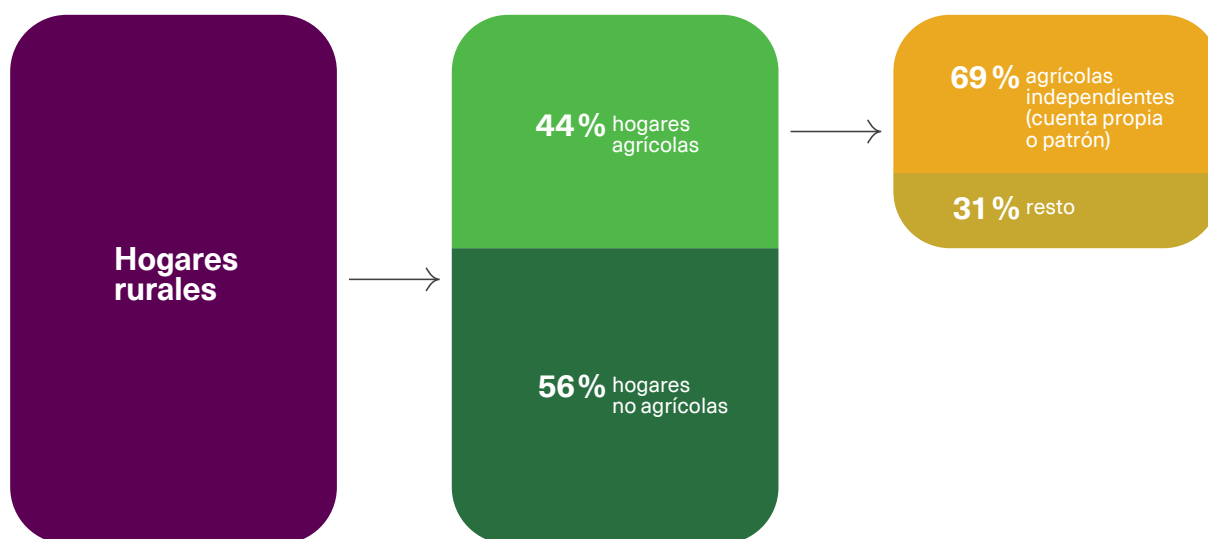
Lejos de ajustarse al estereotipo tradicional del hogar exclusivamente agrícola, los hogares rurales hoy presentan una notable diversidad, no solo entre países, sino también en el interior de cada uno

Entre los hogares agrícolas, se identifica un subconjunto de especial interés: los hogares agrícolas que trabajan de manera independiente, denominados en adelante hogares agrícolas independientes. Este grupo comprende aquellos hogares cuyo jefe o cónyuge

trabaja por cuenta propia (61 % de los hogares agrícolas) o como patrón (8 % de los hogares agrícolas). A diferencia del resto de los hogares agrícolas, su inserción productiva se basa en su propia capacidad para generar ingresos a partir de la tierra, el trabajo familiar y, en algunos casos, la contratación de mano de obra adicional. Estos hogares concentran en gran medida el universo de pequeñas unidades productivas que predomina en ALC (ver el capítulo 2) y suelen caracterizarse por una baja productividad y alta vulnerabilidad. Además, representan en promedio el 69 % de los hogares agrícolas rurales y son casi un tercio de todos los hogares rurales en la región.

Figura 7.1

Clasificación de los hogares rurales según su vínculo laboral con el sector agropecuario.
Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Los hogares agrícolas se definen como aquellos hogares rurales en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Dentro de estos, se consideran hogares agrícolas independientes aquellos cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Recuadro 7.1

Hogares agrícolas, tenencia de la tierra y producción agropecuaria

Las encuestas de hogares de El Salvador (ONEC, 2023), México (INEGI, 2022) y Perú (INEI, 2024) incluyen, además de los módulos laborales habituales, módulos agrícolas que permiten contrastar la definición de hogar agrícola utilizada en este capítulo con indicadores de producción agropecuaria y tenencia de la tierra.

De acuerdo con los módulos laborales, la proporción de hogares rurales agrícolas asciende al 26,8 % en El Salvador, el 56 % en México y el 89 % en Perú. Entre ellos, los hogares agrícolas independientes representan el 58 %, el 74 % y el 90 %, respectivamente.

La información proveniente de los módulos agrícolas de El Salvador y Perú permite examinar la relación entre hogares agrícolas y propiedad de la tierra. En Perú, el 61 % de los hogares agrícolas son propietarios de tierras agropecuarias, mientras que, en El Salvador, esta proporción es del 22 %.

La relación con la condición de hogar productor resulta inequívoca para los hogares agrícolas independientes. Tanto en El Salvador como en Perú, todos los hogares clasificados como agrícolas independientes reportan producción agropecuaria en los módulos agrícolas, ya sea destinada al autoconsumo, la comercialización o ambos fines. En cuanto a la tenencia, entre los hogares agrícolas de Perú predomina la propiedad (70 %), aunque también se observan otros regímenes, como arrendamiento (menos del 4 %) y aparcería o préstamo (28 %). En El Salvador, la propiedad es menos generalizada (34 %) y el arrendamiento y la aparcería tienen una participación importante (36 % y 30 %, respectivamente). En México, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022 no releva información sobre tenencia de la tierra, pero confirma que la totalidad de los hogares agrícolas independientes son también hogares productores.

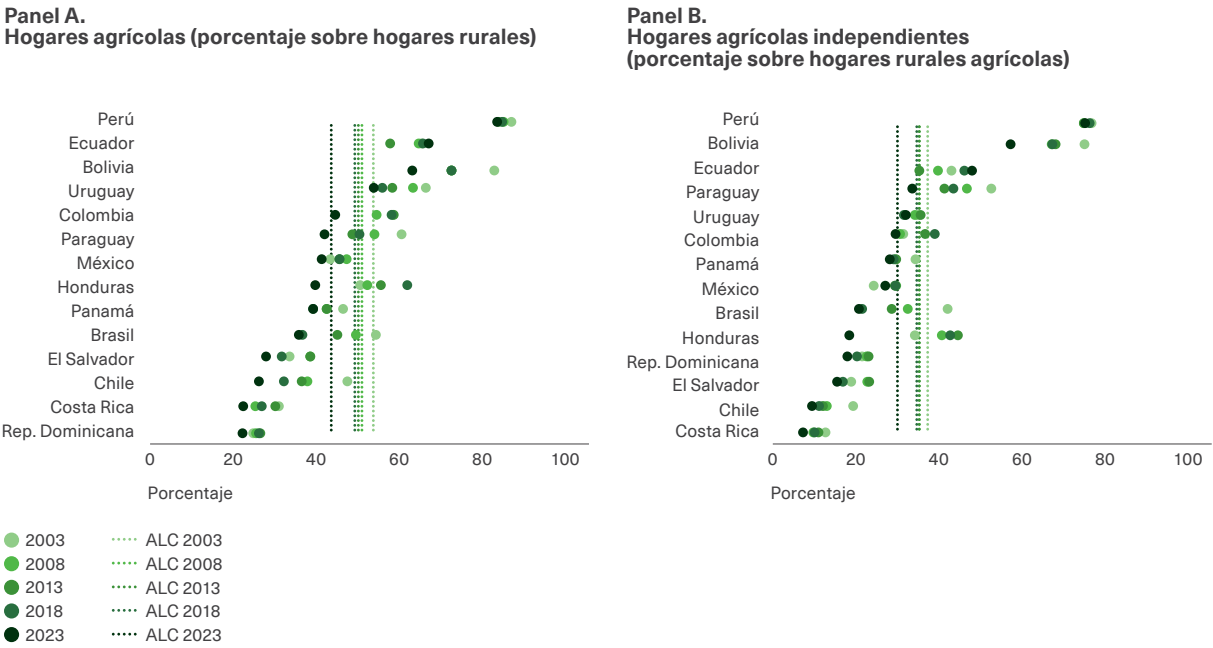
Esta clasificación permite capturar distintos grados de exposición a fenómenos de largo plazo, como el proceso de cambio estructural, y a choques de corto plazo, ya sean climáticos o macroeconómicos, al centrarse en el núcleo de la estrategia productiva del hogar. Aunque no supone que los hogares agrícolas dependan exclusivamente del agro ni se basa en la propiedad de la tierra, y tampoco implica necesariamente que sean productores, algunas de estas dimensiones se entrelazan en la práctica, como ilustra el recuadro 7.1 para los casos de El Salvador, México y Perú.



Se observa una clara tendencia a la reducción de la proporción de los hogares agrícolas y agrícolas independientes en casi toda la región

El porcentaje de hogares agrícolas varía de manera significativa entre países, como muestra el panel A del gráfico 7.1. En Perú, el 84 % de los hogares rurales son agrícolas, mientras que en Costa Rica y República Dominicana representan solo un 22 %. Estas cifras muestran que el mundo rural es heterogéneo, con formas de inserción económica diversas que, como se verá más adelante, se asocian a distintos niveles de vulnerabilidad económica. La heterogeneidad entre países también se manifiesta en el peso relativo de los hogares agrícolas independientes. El panel B del gráfico 7.1 muestra que este porcentaje varía entre un 75 % en Perú y apenas un 7 % en Costa Rica. Esta heterogeneidad se traduce en distintos niveles de vulnerabilidad, como se expone en el apartado siguiente. Más allá de estas diferencias entre países, el gráfico también revela una clara tendencia a la reducción de los hogares agrícolas y agrícolas independientes en casi toda la región durante las dos últimas décadas, con caídas particularmente pronunciadas en Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay.

Gráfico 7.1
Evolución de la participación de hogares agrícolas y agrícolas independientes en el total de hogares rurales en países de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Los hogares agrícolas se definen como aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Dentro de estos, se consideran hogares agrícolas independientes aquellos cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Los ingresos de los hogares rurales

Las fuentes de ingreso de los hogares rurales inciden directamente en su nivel de vulnerabilidad económica. Este apartado presenta los niveles y la evolución de los ingresos, la incidencia de la pobreza y la composición del ingreso total tanto para el conjunto de hogares

rurales como para los hogares agrícolas y agrícolas independientes. Algunos aspectos clave sobre la medición de los ingresos en áreas rurales, fundamentales para interpretar las estadísticas, se detallan en el recuadro 7.2.

Ingresos rurales y brecha de pobreza rural-urbana

Durante las últimas dos décadas, ALC experimentó un crecimiento sostenido de los ingresos de los hogares, acompañado por una marcada reducción de la pobreza (Banco Mundial, 2022b; CEPAL, 2021; Gasparini et al., 2023). En promedio, el ingreso per cápita familiar (medido

en dólares constantes de 2017 y ajustado a paridad de poder adquisitivo [PPA]) creció un 58 % entre 2003 y 2023, con un aumento del 87 % en los hogares rurales frente al 44 % en los urbanos, lo que implicó una reducción parcial de la brecha de ingresos entre ambas áreas.

Recuadro 7.2

Medición de los ingresos en áreas rurales

La medición de los ingresos rurales plantea desafíos específicos que deben considerarse para una adecuada interpretación de las estadísticas. Estos se relacionan con diferencias en el costo de vida respecto de las zonas urbanas, el peso relativo de los ingresos no monetarios y las limitaciones en su captación estadística. A continuación, se destacan algunos de los principales aspectos metodológicos.

Un primer aspecto central es la diferencia en los niveles de precios y costos de vida. CEDLAS (2015) estima que, en promedio, los precios en las áreas rurales de ALC son alrededor del 15 % más bajos que en las urbanas. Mientras que las encuestas de hogares nacionales no suelen contemplar este ajuste, la base CEDLAS (2025) lo incorpora de manera uniforme para todos los países, lo que mejora la comparabilidad regional.

Otro elemento relevante es la mayor presencia de ingresos no monetarios en los hogares rurales, como el consumo de bienes provenientes de la producción agropecuaria propia y no agropecuaria o los pagos en especie. La base CEDLAS (2025) contiene una medida armonizada del ingreso total del hogar, que se construye incorporando ingresos laborales monetarios (como salarios o ganancias del trabajo cuentapropista) y no monetarios (entre ellos, el valor de la producción destinada al autoconsumo y las remuneraciones en especie; por ejemplo, alimentos, vivienda o servicios provistos por el empleador). Como se verá más adelante, omitir el autoconsumo subestimaría los recursos disponibles y distorsionaría las mediciones de pobreza, especialmente entre los hogares con menos ingresos.

Un tercer aspecto está vinculado con los ingresos provenientes de actividades agropecuarias, que representan una fracción significativa de la renta rural. Estos ingresos suelen mostrar fuertes fluctuaciones estacionales, lo que exige emplear periodos de referencia suficientemente amplios para reducir sesgos. En Colombia, por ejemplo, se utilizan periodos de referencia diferenciados según el ámbito: mensual en zonas urbanas y anual en zonas rurales. En la mayoría de los países, sin embargo, esta distinción no se aplica.

Finalmente, deben tenerse en cuenta limitaciones asociadas a la subdeclaración de ingresos. Carletto et al. (2022) muestran que este sesgo es más marcado en los ingresos agrícolas y tiende a incrementarse con el nivel de bienestar. A pesar de ello, la evidencia indica que el uso de ingresos declarados en encuestas de hogares sigue siendo la mejor alternativa disponible para medir la pobreza en ALC, en ausencia de series comparables y armonizadas de consumo.

Como se discutió detalladamente en el capítulo 1, el crecimiento sostenido de los ingresos contribuyó a una fuerte reducción de la pobreza en la región, particularmente en las áreas rurales⁷. En promedio, la proporción de población rural que vive por debajo de la línea internacional de pobreza de USD 6,85 diarios cayó del 66 % al 34 %, pero todavía duplica a la urbana. Este proceso se observa en la mayoría de los países, con avances de distinta magnitud.



La vinculación de los hogares con la actividad agropecuaria, especialmente de forma independiente, sigue asociada a una mayor vulnerabilidad económica, pese a la mejora general de los ingresos rurales

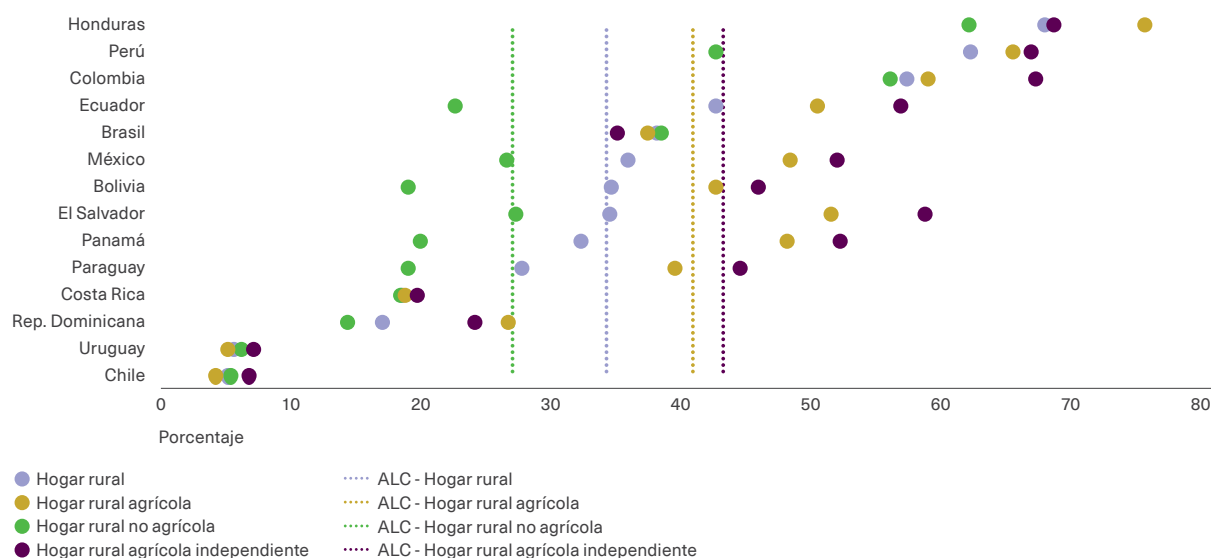
7 Haití y Venezuela son posiblemente las únicas excepciones a la tendencia general de reducción de la pobreza en la región en las últimas décadas, aunque no se cuenta estadísticas oficiales para estos países.

La reducción de la pobreza rural se extiende a todos los tipos de hogares, tanto no agrícolas como agrícolas, ya sean estos últimos asalariados o independientes. Sin embargo, persisten marcadas diferencias en los niveles de vulnerabilidad. En 2023, la tasa de pobreza entre la población rural se ubicó en el 34 %, pero alcanzó el 41 % entre quienes forman parte de hogares agrícolas y llegó al 43 % en el caso de agrícolas independientes. En contraste, entre los hogares rurales no agrícolas, la incidencia de la pobreza fue considerablemente menor, situándose en

el 27 %. Este patrón se repite en casi todos los países (gráfico 7.2), sugiriendo que la vinculación con la actividad agropecuaria, especialmente cuando se ejerce de forma independiente, sigue asociada a mayores niveles de vulnerabilidad económica, incluso en un contexto de mejora general de los ingresos rurales⁸. Como excepción, en los países con una agricultura de alta productividad, como Brasil, Chile y Uruguay, los niveles de pobreza muestran escasas diferencias según el grado de vinculación de los hogares con el agro.

Gráfico 7.2

Pobreza rural en países de América Latina y el Caribe por tipo de hogar, 2023



Nota: La pobreza se define como el porcentaje de personas en hogares con ingresos por debajo de un umbral de 6,85 USD a paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona y por día. Los hogares agrícolas se definen como aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Los hogares agrícolas independientes se definen como aquellos hogares agrícolas cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

⁸ Al analizar por separado hogares de cuentapropistas y de patrones (los dos grupos que componen el conjunto de hogares agrícolas independientes) se observa que los primeros son mucho más pobres que los segundos (45 % frente al 23 %). Sin embargo, dado que los patrones representan, en promedio, solo un 8 % del total de hogares agrícolas, se decidió mantenerlos dentro del grupo de hogares agrícolas para el análisis del gráfico 7.2. Un hallazgo adicional es que los hogares agrícolas no independientes (resto) muestran, en promedio, menores tasas de pobreza que los independientes. Este resultado es particularmente llamativo, dado que contrasta con la visión histórica de los jornaleros como el grupo más vulnerable de las sociedades rurales latinoamericanas, asociada en la literatura a relaciones semif feudales, a la condición de trabajadores sin tierra y a los movimientos campesinos (Bobonis y Morrow, 2014; Knight, 1986; McCreery, 1983). La evidencia sugiere que, en el contexto actual, esa desventaja relativa se ha revertido.



Mercado de Chichicastenango, Guatemala.

¿Cómo generan ingresos los hogares rurales?

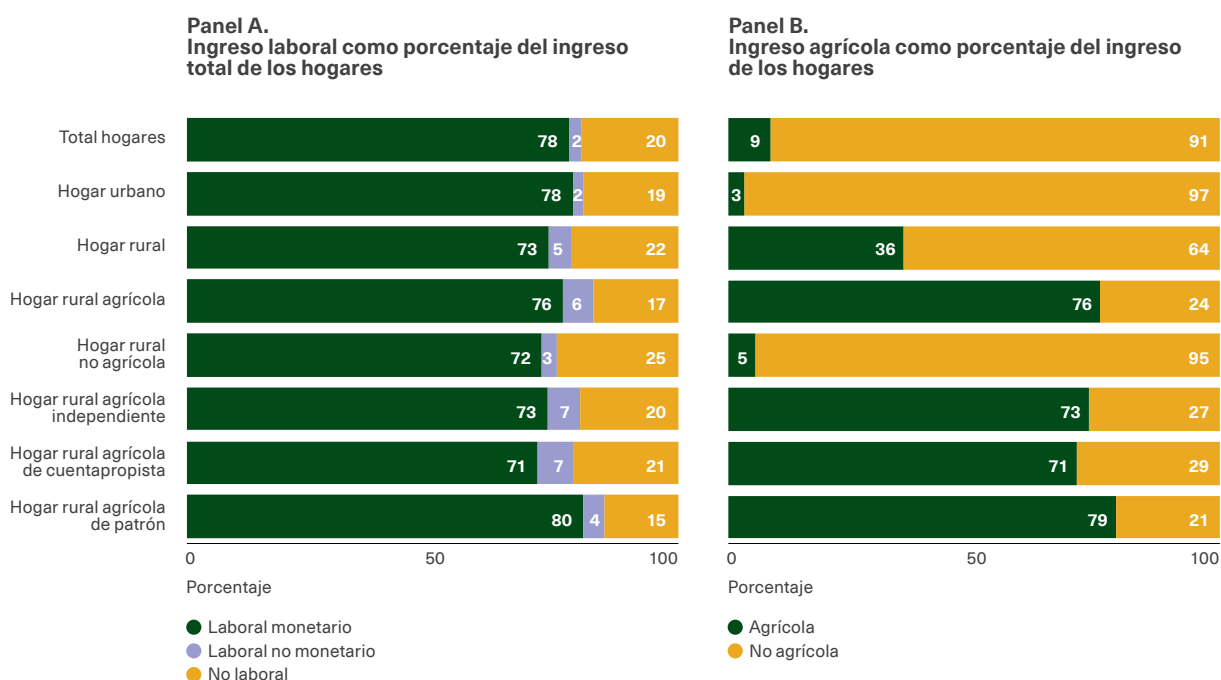
La mayor parte de los ingresos de los hogares proviene del trabajo. Según la información de las encuestas de hogares, los ingresos laborales (incluyendo los monetarios y no monetarios) representan en promedio el 78 % del ingreso total de los hogares rurales de la región, una proporción apenas inferior a la registrada en los hogares urbanos (80 %).

El panel A del gráfico 7.3 muestra que, cuando se mira dentro del universo rural, los hogares agrícolas dependen aún más del trabajo que el resto de los hogares rurales. Los ingresos laborales explican el 82 %

de los ingresos totales de los hogares agrícolas y un 75 % en el caso de los hogares rurales no agrícolas. Dentro del conjunto de hogares agrícolas, la proporción de ingresos labores es algo menor entre los independientes, llegando al 79 %. Ello refleja que este subconjunto se concentra en los deciles más bajos de la distribución del ingreso, donde la baja productividad del trabajo cuentapropista limita el aporte relativo del ingreso laboral, a la vez que las transferencias del Estado y privadas (como las remesas, el apoyo de familiares o las redes comunitarias) representan una fracción significativa del ingreso total de los hogares.

Gráfico 7.3

Descomposición de los ingresos de los hogares por tipo de hogar.
Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: El ingreso laboral incluye ingresos monetarios, como salarios o ganancias del trabajo por cuenta propia, y no monetarios, como autoconsumo y remuneraciones en especie. Los ingresos agrícolas del hogar se estiman como la suma de todos los ingresos laborales (tanto de la ocupación principal como de ocupaciones secundarias) de los miembros que declaran tener como ocupación principal una actividad en el sector agropecuario. Los hogares agrícolas son aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario, mientras que los hogares agrícolas independientes son aquellos donde el jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón. Los totales pueden diferir levemente de 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).



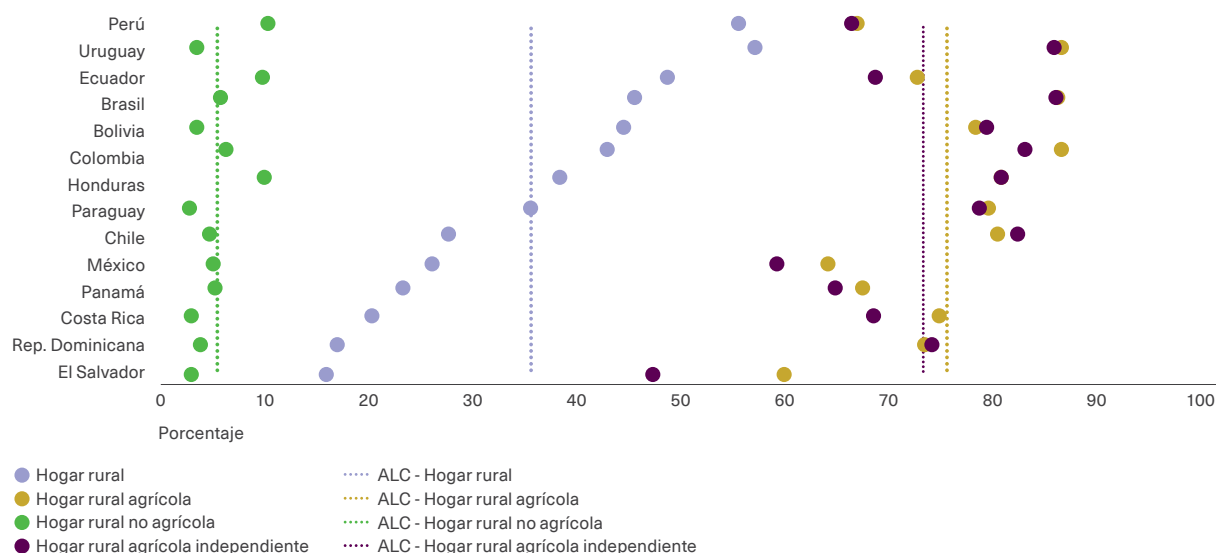
Una alta dependencia del ingreso agrícola expone a los hogares a mayores riesgos y profundiza su vulnerabilidad más allá de lo que muestran las tasas de pobreza

Los contrastes son aún más marcados cuando se compara la composición de esos ingresos laborales entre los distintos tipos de hogares, como muestra el panel B del gráfico 7.3. En promedio, el 36 % del ingreso laboral de los hogares rurales proviene de

actividades en el sector agropecuario⁹. Naturalmente, ese porcentaje es mucho mayor entre los hogares agrícolas (77 %) y agrícolas independientes (75 %). Como muestra el gráfico 7.4, esa concentración es mucho más alta en algunos países, como Brasil y Uruguay, donde alrededor del 87 % de los ingresos laborales, tanto de los hogares agrícolas como los agrícolas independientes, están ligados al agro. En contraste, entre los hogares rurales no agrícolas la participación del agro en los ingresos laborales es marginal, con un promedio regional de apenas el 5 % y un máximo cercano al 10 % en países como Ecuador, Honduras y Perú.

Gráfico 7.4

Ingreso agrícola como porcentaje de los ingresos laborales por tipo de hogar en países de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Los ingresos agrícolas del hogar se estiman como la suma de todos los ingresos laborales (tanto de la ocupación principal como de ocupaciones secundarias) de los miembros que declaran tener como ocupación principal una actividad en el sector agropecuario. Los hogares agrícolas son aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario, mientras que los hogares agrícolas independientes son aquellos cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

⁹ Los ingresos agrícolas del hogar se estiman como la suma de todos los ingresos laborales monetarios y no monetarios (tanto de la ocupación principal como de ocupaciones secundarias) de los miembros que declaran tener como ocupación principal una actividad en el sector agropecuario. Una fracción importante de los ingresos agrícolas puede provenir de la producción propia. En encuestas de hogares, como la ENAHO (Perú) y la ENIGH (México), este componente puede estimarse de manera directa a partir de módulos específicos para productores o de manera indirecta a partir de los ingresos laborales reportados por trabajadores independientes. El método directo arroja valores de la producción propia entre un 25 % y un 30 % superiores a los estimados indirectamente, diferencia consistente con los hallazgos de Gáfaró et al. (2025).

Esta especialización en actividades agropecuarias puede aumentar la exposición de los hogares a los riesgos propios del sector, especialmente entre los de deciles más bajos de ingreso, lo que contribuye a una vulnerabilidad aún más profunda que la reflejada por las tasas de pobreza presentadas anteriormente. Además, la fuerte dependencia del agro puede restringir sus posibilidades de diversificación e inserción en otros sectores. La literatura ha mostrado que esta situación responde a múltiples fricciones (financieras, institucionales y de movilidad laboral) que dificultan la

reasignación de trabajadores hacia actividades más productivas y generan trampas de pobreza en las que los hogares permanecen en ocupaciones de baja productividad con escasas oportunidades de acumulación o transformación (Banerjee y Duflo, 2011; Carter y Barrett, 2006; La Porta y Shleifer, 2014). En contraste, la expansión del empleo en los sectores no agropecuarios en áreas rurales se asocia de manera sistemática con menores niveles de pobreza, inseguridad alimentaria y desigualdad (Imai et al., 2015; Lanjouw y Murgai, 2009; Rahman y Mishra, 2020).

Diversificación de los ingresos laborales y vulnerabilidad en el mundo rural

El análisis de la participación de las distintas fuentes de ingresos revela las estrategias económicas de los hogares rurales y expone sus niveles de vulnerabilidad. El panel A del gráfico 7.5 muestra que, a medida que se avanza desde los hogares más pobres a hogares de mayores ingresos (ordenados en deciles de ingreso total familiar dentro de cada país), aumenta significativamente la participación de las fuentes laborales en el ingreso total. En promedio, los ingresos laborales en los hogares rurales del primer decil representan apenas un 39 % del total, mientras que en los del decil más alto alcanzan el 86 %. La menor participación de los ingresos laborales en los deciles más bajos se compensa, en parte, con una mayor incidencia de las transferencias públicas y privadas.

El panel B del gráfico 7.5 muestra, para el conjunto de hogares rurales, una clara relación positiva entre el nivel de ingreso laboral y el grado de diversificación de las fuentes laborales. En los deciles más bajos, los ingresos agrícolas representan más del 63 % de los ingresos laborales y se derivan mayormente del trabajo agrícola por cuenta propia. A medida que se asciende en la distribución del ingreso, aumenta la participación del trabajo asalariado en otros sectores productivos. En particular, el trabajo cuentapropista no agrícola mantiene una presencia relativamente constante a lo largo de la distribución del ingreso. En

suma, los hogares rurales de mayores ingresos tienen una canasta laboral más diversificada, lo que puede reducir su vulnerabilidad económica.

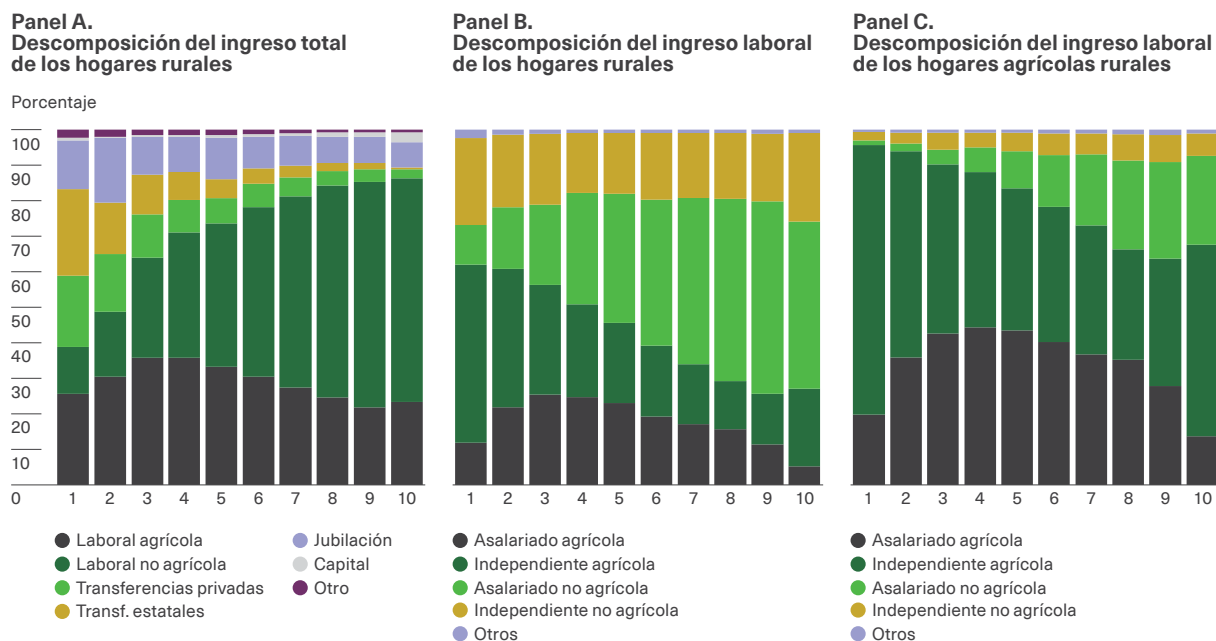
El panel C del gráfico 7.5 repite este análisis, pero se enfoca solo en los hogares agrícolas rurales. Entre los hogares agrícolas en los deciles más bajos, los ingresos laborales provienen casi exclusivamente del trabajo independiente en el sector agropecuario (ya sea como cuentapropista o patrón), que representa el 75 % del total. En cambio, la participación de los ingresos provenientes del trabajo asalariado agrícola crece en los primeros deciles y alcanza un máximo alrededor del cuarto decil, para luego disminuir. En los hogares de mayores ingresos, las fuentes laborales no agrícolas tienen un mayor peso.

Aunque en los tramos superiores de la distribución se observa cierta diversificación de las fuentes laborales de los hogares agrícolas, los ingresos provenientes del agro siguen siendo predominantes e incluso en el decil más alto representan el 68 %¹⁰. Esta dependencia del sector agropecuario puede limitar su margen de maniobra ante choques económicos o climáticos, o cambios profundos, como los que ocurren durante la transformación estructural.

10 Gáfaró et al. (2025) han documentado patrones similares, que muestran que la combinación de actividades laborales es muy limitada entre los hogares de menores ingresos, especialmente entre quienes se dedican exclusivamente a la agricultura, mientras que la diversificación crece en los tramos superiores de la distribución, aunque sin llegar a ser generalizada. Los resultados del capítulo son consistentes con esa evidencia.

Gráfico 7.5

Descomposición del ingreso de los hogares por decil. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: La desagregación corresponde a deciles del ingreso total familiar calculados a nivel nacional. Tomando el promedio de los 14 países, los cuatro primeros deciles incluyen al 53 % de los hogares rurales, mientras que los cuatro últimos deciles, solo al 26 %. El ingreso laboral incluye ingresos monetarios (salarios o ganancias del trabajo por cuenta propia) y no monetarios (autoconsumo y remuneraciones en especie). Los ingresos agrícolas del hogar se estiman como la suma de todos los ingresos laborales (tanto de la ocupación principal como de las secundarias) de los miembros que declaran tener como ocupación principal una actividad en el sector agropecuario. Los hogares agrícolas son aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. El gráfico A.7.2 en el apéndice de este capítulo, disponible en la edición en línea del RED, muestra la descomposición para los hogares urbanos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

En suma, este análisis revela patrones diferenciados según el nivel de ingreso y el grado de vinculación con la actividad agropecuaria. Los hogares rurales más pobres dependen en mayor medida de transferencias públicas y privadas y la mayor parte de sus ingresos laborales son generados por cuenta propia. En contraste, a medida que se asciende en la distribución del ingreso, se incrementa la diversificación de las fuentes de ingresos laborales y crece el peso del trabajo asalariado en sectores no agropecuarios. Estos hallazgos reflejan distintas estrategias de generación de ingresos y revelan heterogeneidad en el nivel de vulnerabilidad frente choques



A medida que se asciende en la distribución del ingreso, se incrementa la diversificación de las fuentes de ingresos laborales y crece el peso del trabajo asalariado en sectores no agropecuarios

La transformación del empleo en el mundo rural

Estructura sectorial del empleo

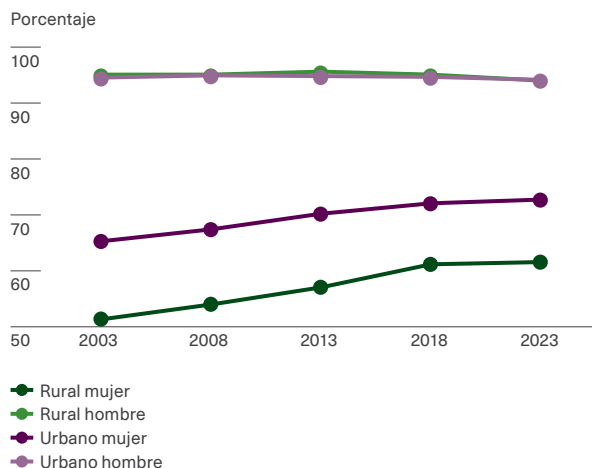
Antes de analizar los cambios en la estructura del empleo, vale la pena considerar brevemente la evolución de la oferta laboral. En las últimas dos décadas, la participación laboral aumentó en las zonas rurales de ALC, pero lo hizo en paralelo a las zonas urbanas, manteniendo relativamente estables las brechas entre ambas áreas. Entre 2003 y 2023, la tasa de participación en áreas rurales creció del 73 % al 77 %, manteniéndose siempre unos cinco puntos por debajo de la tasa urbana. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mayor participación de las mujeres rurales, que pasó del 51 % al 62 %, como muestra el panel A del

gráfico 7.6, aunque sin señales claras de convergencia con las mujeres urbanas. También persisten brechas en el margen intensivo: en 2023, las personas ocupadas en áreas rurales trabajaban, en promedio, dos horas semanales menos que sus contrapartes urbanas, en un contexto de leve, pero generalizada, reducción del tiempo de trabajo, como muestra el panel B del gráfico 7.6¹¹. En síntesis, más allá de los avances en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, no se observan transformaciones significativas en la oferta laboral que hayan reducido las distancias estructurales entre el mundo rural y el urbano.

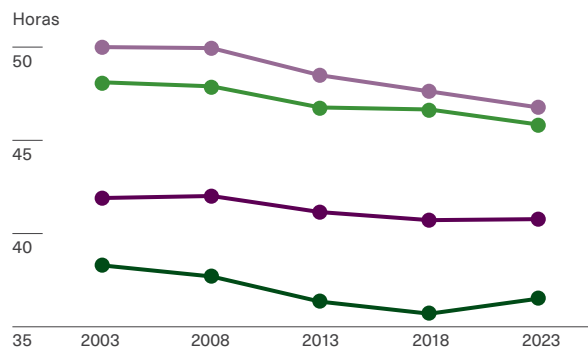
Gráfico 7.6

Evolución de la oferta laboral en zonas rurales y urbanas por género. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023

Panel A. Participación laboral



Panel B. Horas trabajadas por semana



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años.

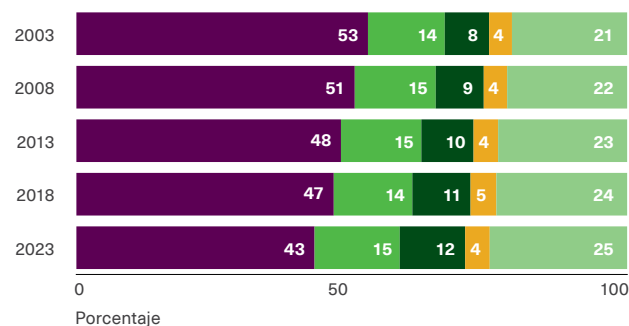
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

11 Las diferencias en horas trabajadas deben interpretarse con cautela, dado que el trabajo agrícola es en promedio más físico y estacional, lo cual puede reflejar tanto limitaciones de la oferta como variaciones en la demanda de trabajo. Por otra parte, estas comparaciones no controlan por las características de los trabajadores ni por los sectores de empleo. Al restringir la comparación a trabajadores con el mismo nivel educativo, la brecha en tiempo semanal trabajado entre áreas rurales y urbanas se reduce a poco menos de 1 hora entre las personas de nivel educativo medio y alto, pero se mantiene en 2 horas para las de bajo nivel educativo.

Gráfico 7.7

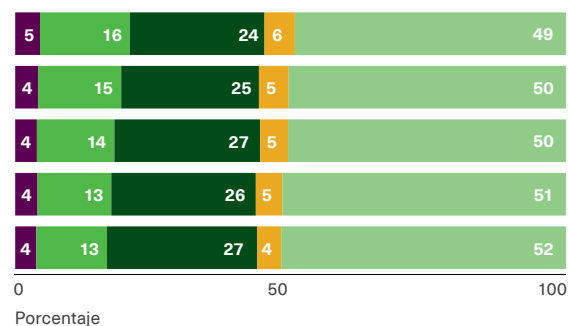
Evolución de la estructura sectorial del empleo. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023

Panel A.
Estructura sectorial del empleo rural



● Sector agropecuario ● Servicios domésticos
● Industria y construcción ● Otros
● Servicios

Panel B.
Estructura sectorial del empleo urbano



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. La categoría “sector agropecuario” comprende agricultura, ganadería, caza y silvicultura; “servicios” incluye servicios profesionales, salud y educación; “otros” engloba pesca, explotación de minas y canteras, comercio, transporte y administración. Los sectores primarios pesca y explotación de minas y canteras representan una fracción muy baja del empleo rural (1,6 %) y por ello se incluyen dentro de la categoría “otros”. Los totales pueden diferir levemente de 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Los cambios más profundos se observan en la estructura del empleo y en las formas de inserción laboral. En economías rezagadas, los pequeños productores rurales representan la mayor proporción de los habitantes rurales y concentran casi todo su tiempo laboral en actividades agrícolas en su propia parcela, sin acceso a mercados laborales externos. Con el desarrollo económico, estos hogares comienzan a contratar mano de obra o a vender su trabajo en otros establecimientos, integrándose progresivamente al mercado de trabajo más amplio (Charlton et al., 2021; Taylor y Charlton, 2018). Este fenómeno ha sido considerado un componente central del proceso de desarrollo: ya en 1954, Arthur Lewis (1954) identificaba el desplazamiento de trabajadores desde el sector agropecuario hacia sectores más dinámicos como el núcleo mismo del crecimiento económico, y Timmer (1988) acuñó el concepto de “transformación agrícola” para describir esta evolución estructural. Buena parte de los cambios en los mercados laborales rurales de ALC responde a esta transición, aunque de forma

menos dinámica que en países desarrollados (ver el capítulo 1).

● ●
Por primera vez en la región, menos de la mitad de los trabajadores rurales están ocupados en el sector agropecuario, representando una caída de 10 puntos porcentuales desde 2003

El panel A del gráfico 7.7 estudia a la población económicamente activa con edades entre 25 y 54 años y revela que ALC ha experimentado en las últimas dos décadas una disminución sostenida del empleo en el sector agropecuario, mientras que el sector de servicios ha absorbido una proporción creciente de trabajadores. Por primera vez en la región, menos de la mitad de los trabajadores rurales están ocupados en el sector agropecuario, lo que representa



Producción del tequila en México.

una caída de 10 puntos porcentuales desde 2003¹². Este cambio ha transformado profundamente la estructura del empleo en áreas rurales, donde las actividades agrícolas concentraban históricamente la mayoría de los puestos de trabajo. En contraste,

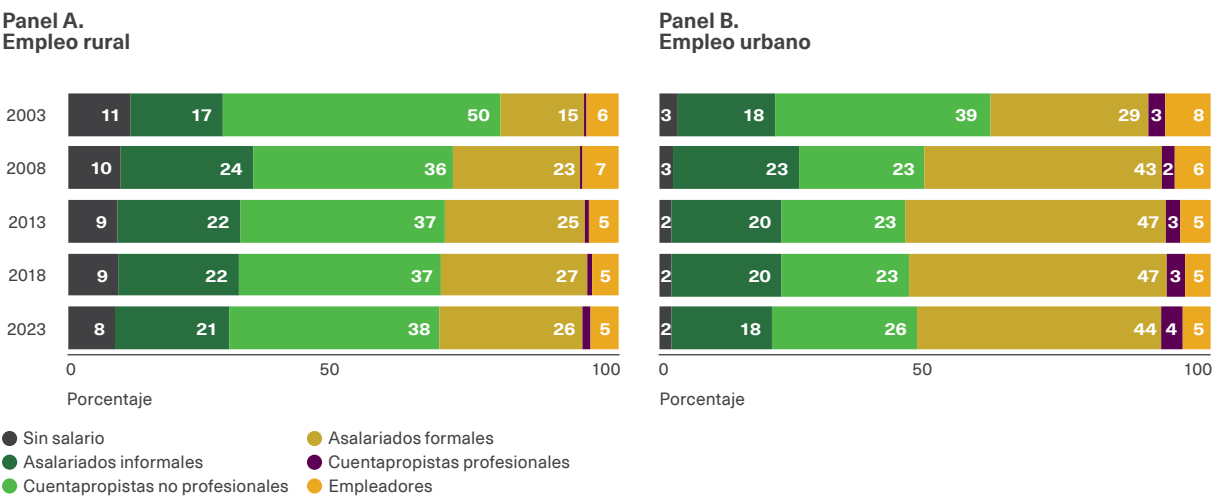
las zonas urbanas no muestran cambios de igual magnitud, precisamente porque la transición hacia una economía de servicios ocurrió allí mucho antes y sus mercados laborales ya presentan una estructura diversificada.

Relaciones laborales y caída de la informalidad laboral

En paralelo con los cambios de la estructura sectorial del empleo, la organización del trabajo en el ámbito rural también ha experimentado transformaciones. Durante las últimas dos décadas se observa cierta reducción de formas de ocupación predominantemente informales, como el trabajo por cuenta propia de baja

calificación, el empleo asalariado no registrado y el no remunerado, y una expansión de modalidades más estables y reguladas, como el trabajo asalariado registrado (Jensen, 2022; La Porta y Shleifer, 2008, 2014; Schoar, 2010).

Gráfico 7.8
Evolución de las relaciones laborales. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. Los totales pueden diferir levemente de 100 % por redondeo
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

12 Hay importantes heterogeneidades entre países que responden tanto al grado de desarrollo como a factores idiosincráticos, cuando se restringe la mirada al empleo rural, se observa una correlación negativa con el PIB per cápita (véase el gráfico A.7.3 en el apéndice de este capítulo, disponible en la edición en línea del RED).

En las zonas rurales de ALC, la proporción de asalariados creció de forma sostenida, pasando del 32 % en 2003 al 47 % en 2023 (ver el panel A del gráfico 7.8) impulsada sobre todo por el aumento del empleo asalariado registrado o formal. En contrapartida, se redujo la participación del trabajo cuentapropista de baja calificación (de un 50 % a un 38 %) y del empleo no remunerado (de un 11 % a un 8 %), este último mayormente representado por trabajadores familiares que, como se discute en el siguiente apartado, son principalmente mujeres. En conjunto, estos cambios reflejan una disminución de la informalidad laboral rural de 11 puntos porcentuales, pasando del 78 % en 2003 al 67 % en 2023. La mayor parte de esta disminución tuvo lugar en la primera década (2003-2013), mientras que en los años posteriores se tendió a la desaceleración e incluso al estancamiento. El panel B del gráfico 7.8 muestra una evolución similar en las áreas urbanas, donde la informalidad laboral pasó del 60 % en 2003 al 47 % en 2023.

Como muestra el panel A del gráfico 7.9, la informalidad rural experimentó una reducción a lo largo del periodo en la mayoría de los países, aunque con magnitudes heterogéneas y sin un patrón uniforme. En algunos casos se advierte incluso una reversión parcial de la tendencia, probablemente vinculada a los efectos de la pandemia del COVID-19. Tal es el caso de Panamá y Uruguay, donde la disminución sostenida hasta 2018 se revirtió en el quinquenio siguiente. El panel B del mismo gráfico revela, además, que la incidencia de la informalidad es sustancialmente mayor en el sector agropecuario que en las demás actividades rurales, un patrón que se repite de manera consistente en casi todos los países. Así, la caída de la informalidad en el mundo rural está al menos en parte asociada al cambio estructural, en la medida en que la transición de trabajadores del agro hacia sectores no agropecuarios parece contribuir a la formalización.



La informalidad laboral sigue siendo significativamente mayor en las áreas rurales, donde alcanza el 67 %, frente al 47 % en las áreas urbanas

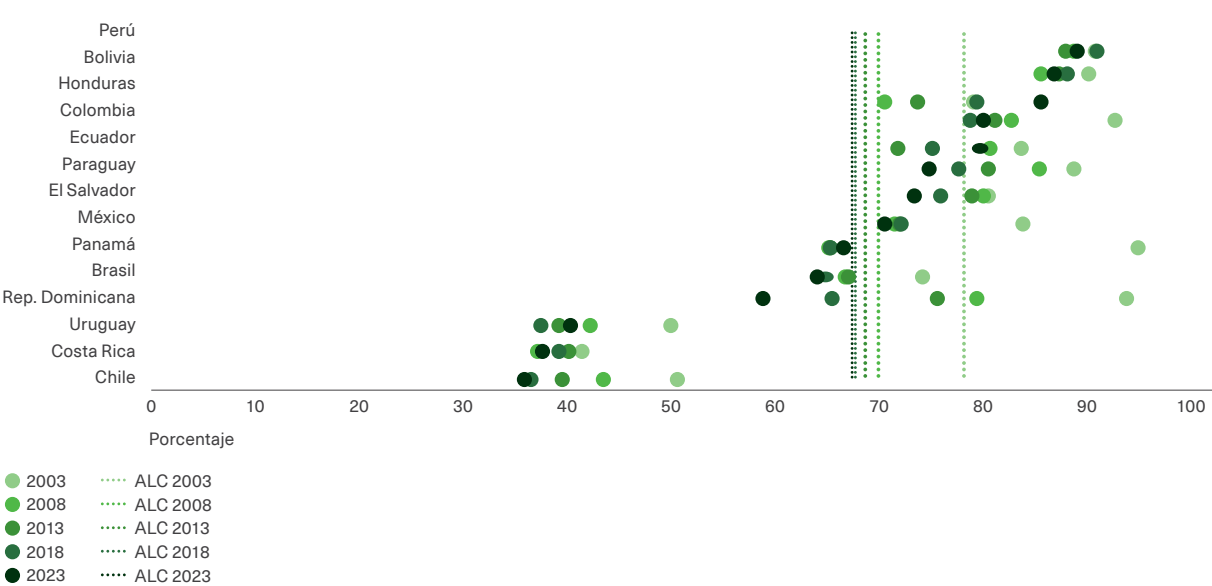
A pesar de estos avances, la informalidad laboral sigue siendo significativamente mayor en las áreas rurales: en 2023 alcanzaba, en promedio, el 67 %, 20 puntos porcentuales por encima de las zonas urbanas (47 %). Esta persistencia refleja barreras estructurales que limitan el acceso al empleo formal para una parte sustantiva de la población rural (Ulyssea, 2020). La alta informalidad restringe el acceso a la protección social vinculada al empleo registrado (también denominada protección social contributiva) y a mecanismos de estabilidad laboral (Fields, 2004; Gasparini y Tornarolli, 2009; Maloney, 2004; Tornarolli et al., 2014), perpetuando la vulnerabilidad. La situación es aún más crítica entre los jóvenes (15 a 24 años) y mayores de 55 años en zonas rurales, cuyas tasas de informalidad alcanzan el 77 %, alrededor de 10 puntos porcentuales más que para el grupo de 25 a 54 años.

Gráfico 7.9

Informalidad laboral rural en países de América Latina y el Caribe

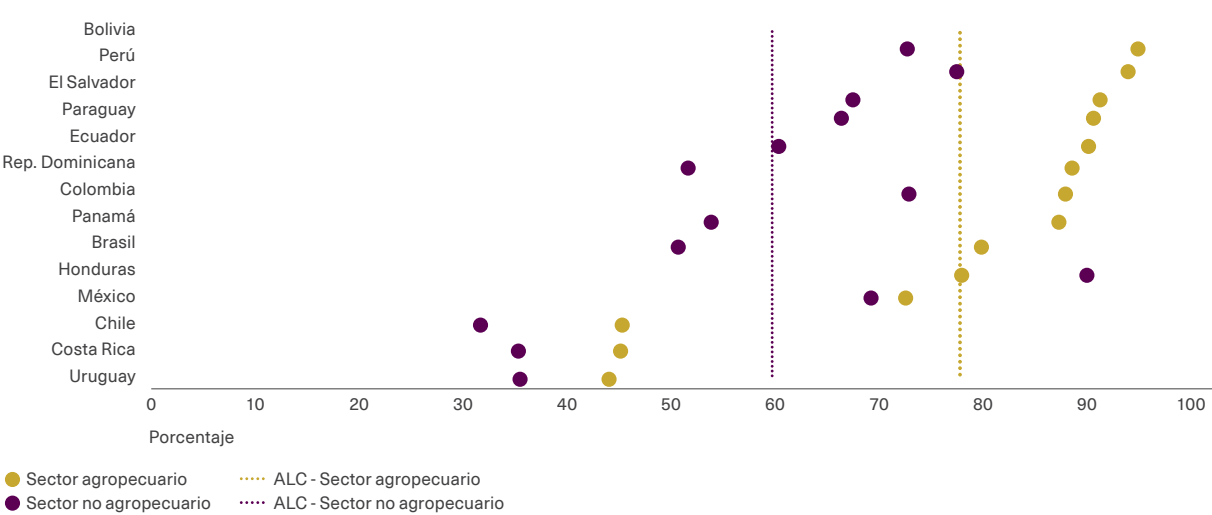
Panel A.

Evolución de la informalidad 2003-2023



Panel B.

Informalidad del sector agropecuario frente a otros sectores, 2023



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. La tasa de informalidad resulta de la suma de trabajadores asalariados informales, cuentapropistas no profesionales y trabajadores sin salario.

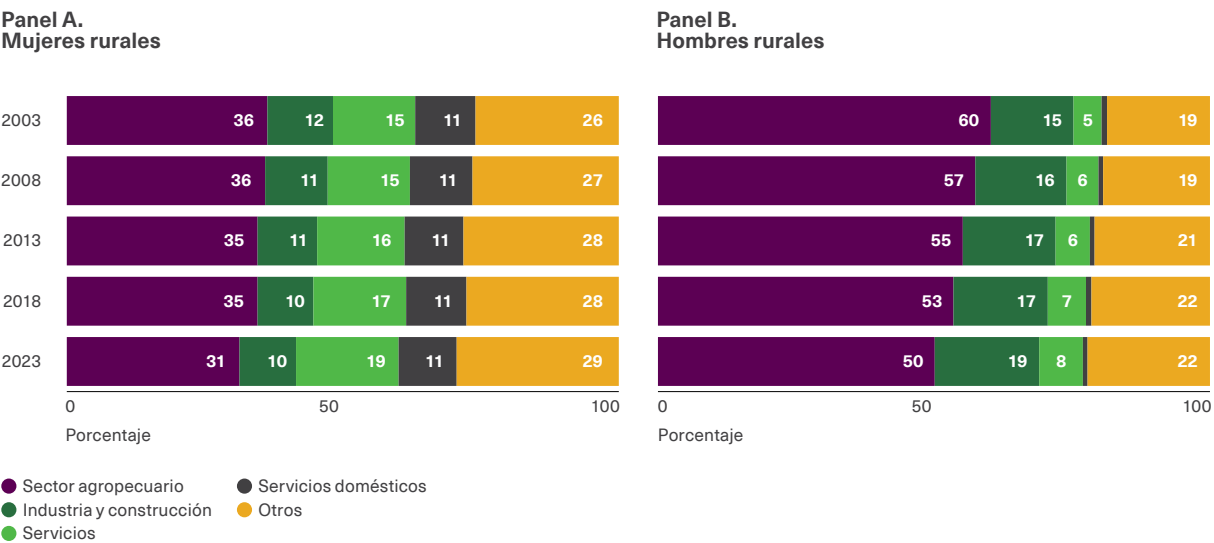
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Brechas de género en los mercados laborales rurales

El proceso de cambio estructural en los países de ALC está afectando la situación laboral de las mujeres rurales respecto de los hombres (Marchionni et al., 2025). El gráfico 7.10 muestra que en la región se viene reduciendo la participación tanto de hombres como de mujeres en el sector agropecuario. Las mujeres se han desplazado mayormente hacia el sector de servicios (panel A), transición que podría

estar asociada a una mayor compatibilidad entre las actividades del sector terciario y las responsabilidades domésticas, así como a la expansión de empleos tradicionalmente feminizados, como los de educación, salud y comercio. Los hombres rurales también han migrado hacia los servicios, pero especialmente hacia la industria y la construcción (panel B).

Gráfico 7.10
Evolución de la estructura sectorial del empleo rural por género. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. La categoría “sector agropecuario” comprende agricultura, ganadería, caza y silvicultura; “servicios” incluye servicios profesionales, salud y educación; “otros” engloba pesca, explotación de minas y canteras, comercio, transporte y administración. Los sectores primarios de pesca y explotación de minas y canteras representan una fracción muy baja del empleo rural (1,6 %) y por ello se incluyen dentro de la categoría “otros”. Los totales pueden diferir levemente de 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Estos cambios han ido acompañados también por transformaciones en la forma de inserción laboral, como ilustra el gráfico 7.11. Entre 2003 y 2023 aumentó el empleo asalariado formal y se redujo el trabajo familiar no remunerado entre las mujeres, así como el autoempleo entre los hombres. Si bien estos cambios implican cierta caída en la participación de

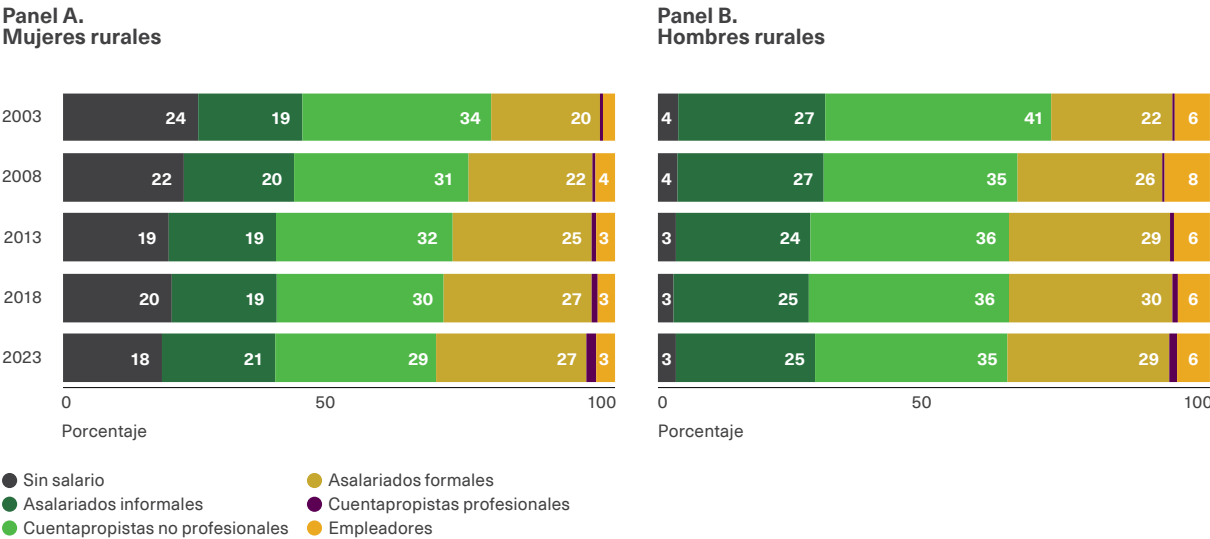
arreglos laborales informales (que incluyen el empleo asalariado no registrado, el trabajo por cuenta propia de baja calificación y el empleo no remunerado), la informalidad laboral en el mundo rural sigue siendo muy alta: en 2023, el 68 % de las mujeres y el 63 % de los hombres en esas áreas seguían ocupando empleos informales. Como argumentan

Marchionni et al. (2025), esta aparente paridad esconde una desigualdad profunda en el tipo de inserción laboral de hombres y mujeres: el empleo no remunerado representa el 18 % de las ocupaciones femeninas en el mundo rural, frente a apenas el 3 % de las masculinas.

La evidencia muestra que la maternidad constituye uno de los principales determinantes de las brechas de género en el mercado laboral de ALC (Berniell et al., 2021, 2023; Marchionni y Pedrazzi, 2025). En los entornos rurales, este patrón adquiere características específicas. Marchionni et al. (2025) documentan que el nacimiento del primer hijo reduce de manera significativa la oferta laboral femenina tanto en términos de participación como de horas trabajadas. Asimismo, la maternidad induce una

reasignación hacia ocupaciones más precarias, en particular en el sector primario y en el empleo informal, como ilustra el gráfico 7.12. En este último caso, se incrementan las tres modalidades de informalidad, esto es, trabajo asalariado no registrado, por cuenta propia y no remunerado, siendo esta última la que más crece en las áreas rurales en comparación con las urbanas (panel B). Antes de la maternidad, un 23 % de las mujeres rurales ocupadas ya trabajaba sin remuneración, frente a solo un 3 % en las áreas urbanas, y esta proporción se incrementa tras el nacimiento del primer hijo. Este mecanismo limita la capacidad de las mujeres rurales de aprovechar plenamente las oportunidades generadas por el cambio estructural, profundizando desigualdades preexistentes.

Gráfico 7.11
Evolución de las relaciones laborales por género. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023

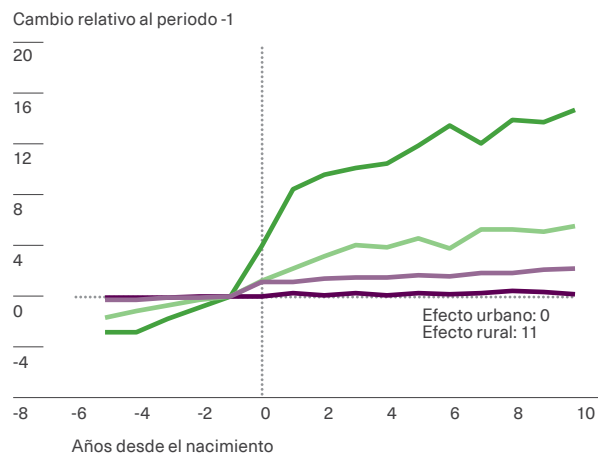


Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

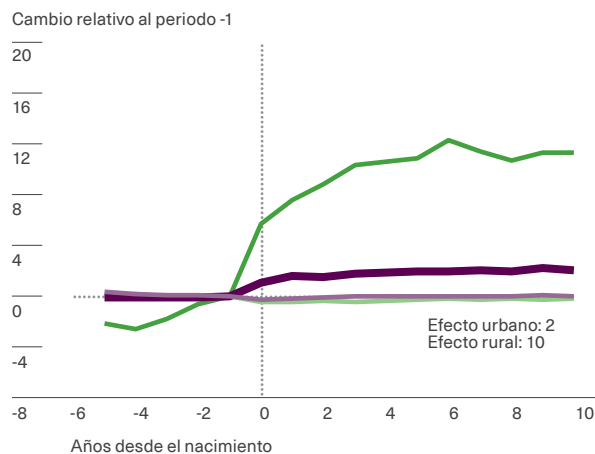
Gráfico 7.12

Efecto del primer hijo sobre la probabilidad de distintos tipos de empleo en zonas rurales y urbanas de América Latina y el Caribe

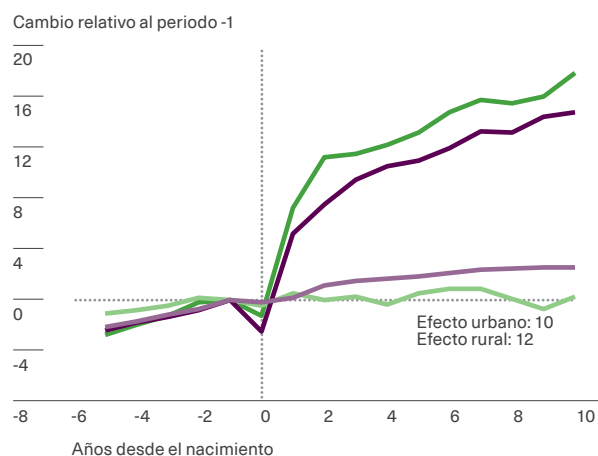
Panel A.
Empleo en el sector primario



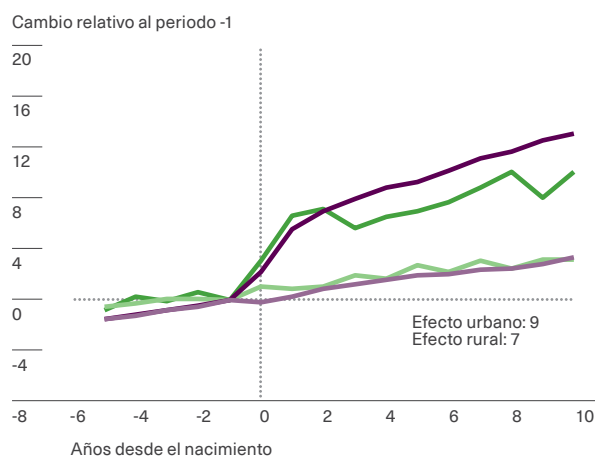
Panel B.
Empleo no remunerado



Panel C.
Empleo asalariado no registrado



Panel D.
Cuentapropista no profesional



— Mujer rural
— Hombre rural
— Mujer urbana
— Hombre urbano

Nota: Las líneas muestran el cambio (medido en puntos porcentuales) de cada uno de los indicadores a lo largo del tiempo respecto al período base (correspondiente al año anterior al nacimiento del primer hijo). La categoría "sector primario" comprende agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y minería.

Fuente: Marchionni et al. (2025, Figura 8).



Persiste una marcada desigualdad de género en el tipo de inserción laboral: el 18 % de las trabajadoras rurales no recibe remuneración, frente al 3 % de los hombres. La maternidad incrementa esta brecha

A partir de datos de uso del tiempo en México, Marchionni et al. (2025) aportan evidencia complementaria, que muestra cómo la carga doméstica limita la autonomía económica de las mujeres rurales. Si bien las demandas de cuidado infantil son altas, la brecha

rural-urbana en este aspecto es reducida. En cambio, las madres rurales dedican mucho más tiempo que sus pares urbanas a los quehaceres domésticos, la producción para el autoconsumo y tareas como la recolección de agua. Estas responsabilidades, junto con el menor acceso a tecnologías ahorradoras de trabajo y a servicios domésticos externos, restringen el tiempo disponible para el empleo remunerado. Ello sugiere que la persistencia de las brechas entre zonas rurales y urbanas en el empleo femenino responde no solo a la segmentación laboral, sino también a cargas desiguales de tiempo dentro del hogar, que siguen recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres rurales.

Remuneraciones en el mundo rural

Los ingresos laborales por hora han mostrado una tendencia creciente en la región. En las zonas rurales el salario promedio creció un 44 % durante las últimas dos décadas. Pese a estos avances, la brecha rural-urbana persiste: en 2023, los salarios rurales eran, en promedio, un 34 % inferiores a los urbanos. Esta brecha salarial puede explicarse tanto por factores de oferta (características de los trabajadores) como de demanda laboral (características de las empresas). El gráfico 7.13 permite visualizar el rol de los diferentes factores.

Del lado de las empresas, las brechas salariales pueden surgir por una mayor presencia de sectores de baja productividad en las zonas rurales, especialmente en unidades de baja escala en el sector agropecuario (Loayza y Rigolini, 2016). En efecto, el salario horario, que incluye tanto remuneraciones monetarias como no monetarias y contempla tanto el empleo asalariado como el autoempleo, muestra claras diferencias según el tipo de trabajador: los urbanos no agropecuarios perciben los ingresos más altos, con un salario promedio por hora de USD 6; le siguen los trabajadores rurales no agropecuarios (USD 4,8), los urbanos agropecuarios (USD 3,6) y, finalmente, los rurales agropecuarios, con un ingreso promedio de solo USD 3,3. Este ordenamiento refleja la existencia de una doble penalidad salarial vinculada a trabajar en el sector agropecuario

y residir en zonas rurales. La brecha salarial entre los extremos es sustantiva: los trabajadores rurales del agro ganan por hora, en promedio, un 46 % menos que los trabajadores urbanos no agropecuarios (barra 2 del gráfico 7.13).

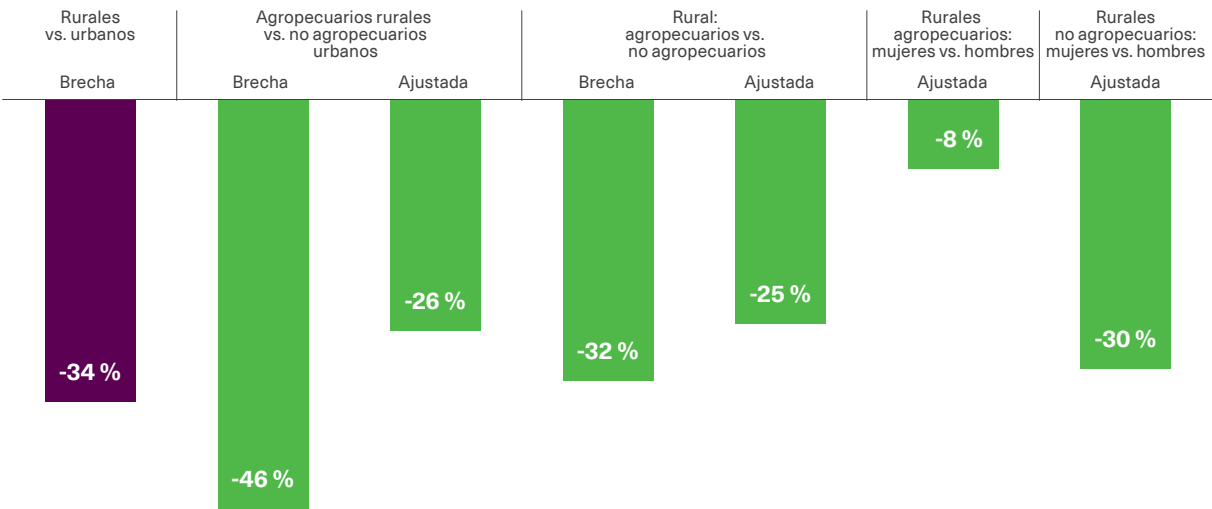
Estas brechas salariales reflejan también factores del lado de la oferta de trabajo. Por ejemplo, como se documentó en el capítulo 6, las áreas rurales presentan un rezago en términos de capital humano respecto de las urbanas. Consistentemente, las brechas salariales se reducen cuando se mantienen constantes características de los trabajadores, como su edad, sexo y educación. En efecto, la brecha salarial entre los trabajadores rurales del agro y los urbanos no agropecuarios pasa del 46 % al 26 % (barras 2 y 3 del gráfico 7.13), lo que confirma que una parte importante de esa desventaja responde a diferencias en las características observables de los trabajadores. En contraste, la brecha salarial entre trabajadores del sector agropecuario y no agropecuario dentro del mundo rural apenas se reduce luego de controlar por las características de los trabajadores, pasando del 32 % al 25 % (barras 4 y 5 del gráfico 7.13). Asimismo, las mujeres del sector agropecuario rural ganan por hora un 8 % menos que sus pares varones, mientras que la brecha salarial alcanza el 30 % entre trabajadoras y trabajadores rurales fuera del agro (barras 6 y 7 del gráfico 7.13)¹³.

13 Para las estimaciones de las ecuaciones de Mincer se excluye de la muestra a los individuos sin salario. Por lo tanto, la brecha salarial entre mujeres y hombres rurales, especialmente en el sector agropecuario (barra seis del gráfico 7.13), esconde otra desigualdad mayor discutida anteriormente: la alta incidencia del empleo no remunerado entre las trabajadoras agrícolas.



Programa de Formación de formadoras dirigido a mujeres mineras auspiciado por CAF en Bolivia.

Gráfico 7.13
 Brechas salariales. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Las brechas se calculan a partir de la estimación de ecuaciones de Mincer para individuos de 25 a 54 años, donde la variable dependiente es el logaritmo del salario horario. El modelo base solo incluye un indicador de ruralidad y permite computar la brecha no condicionada rural-urbana (barra 1). Luego se agregan indicadores del sector productivo (agro frente a no agro) y su interacción con la ruralidad, que permiten obtener las brechas entre trabajadores agropecuarios rurales y no agropecuarios urbanos (barra 2), y entre trabajadores rurales agropecuarios y trabajadores rurales no agropecuarios (barra 4). Para computar las brechas condicionadas (barras 3 y 5) se agregan controles por educación, edad y género. Por último, se estima un tercer modelo solo para la muestra de trabajadores rurales, que además de la variable binaria de sector agropecuario incluye un indicador de género y su interacción con el sector (además de controles por educación y edad). A partir de este último modelo se obtienen las brechas de género (barras 6 y 7).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Los promedios del gráfico 7.13 ocultan importantes heterogeneidades entre países. El gráfico 7.14 muestra la asociación entre el PIB per cápita (como aproximación del grado de desarrollo y del avance del proceso de cambio estructural) y el salario promedio tanto en áreas urbanas (panel A) como rurales (panel B) de cada país. Se muestra también la relación entre el PIB per cápita y el salario promedio rural agropecuario (panel C) y rural no agropecuario (panel D). Para cada país se muestran varios años, lo que permite realizar, a su vez, un análisis temporal. Se observa que los salarios horarios siguen un patrón creciente en relación con el PIB per cápita, que se vuelve más pronunciado a medida que aumenta el nivel de desarrollo. Esta relación positiva y convexa, menos marcada en las zonas rurales (panel B) y en particular en el sector agropecuario (panel C), puede asociarse a menores retornos al capital humano (ver el recuadro 7.3), aunque no puede descartarse la influencia de otros mecanismos. Por ejemplo, una literatura reciente enfatiza que el poder de las empresas en la determinación de los salarios

aumenta con el grado de concentración del mercado (Card, 2022; Manning, 2021). Este mecanismo podría ser particularmente relevante a medida que el agro se transforma en el proceso de desarrollo, pues mientras el trabajo por cuenta propia se reduce, la tecnificación y la producción a gran escala impulsa una mayor concentración en menos empresas que aumentan su capacidad de fijación de salarios. En este sentido, la transición del empleo agropecuario hacia formas más asalariadas podría estar acompañada por dinámicas de mercado laboral que limitan la traslación de la productividad a los salarios.

●●

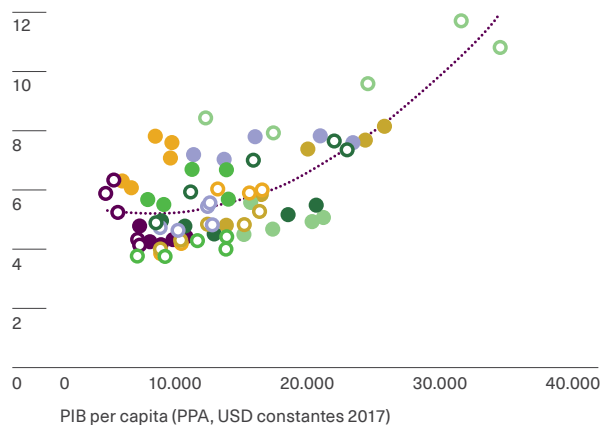
La transición del empleo agropecuario hacia formas más asalariadas podría estar acompañada por dinámicas de mercado laboral que limitan la traslación de la productividad a los salarios

Gráfico 7.14

Relación entre salarios y PIB per cápita en países de América Latina y el Caribe, 2003-2023

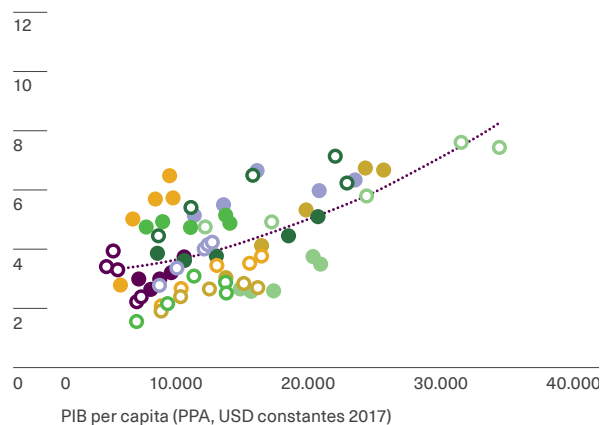
Panel A. Salario urbano

PPA, USD constantes 2017



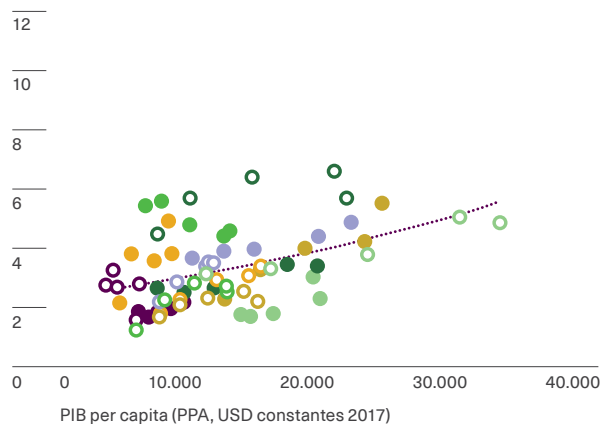
Panel B. Salario rural

PPA, USD constantes 2017



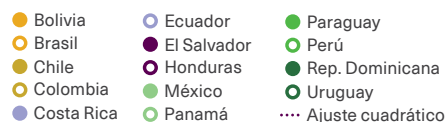
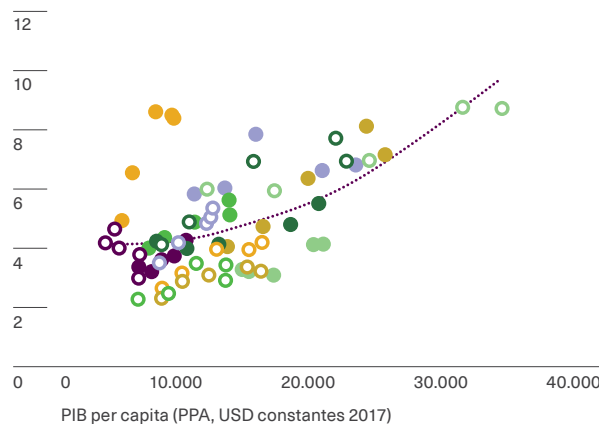
Panel C. Salario rural agropecuario

PPA, USD constantes 2017



Panel D. Salario rural no agropecuario

PPA, USD constantes 2017



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. Los salarios refieren al salario horario en la ocupación principal.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025) y Banco Mundial (2025h).

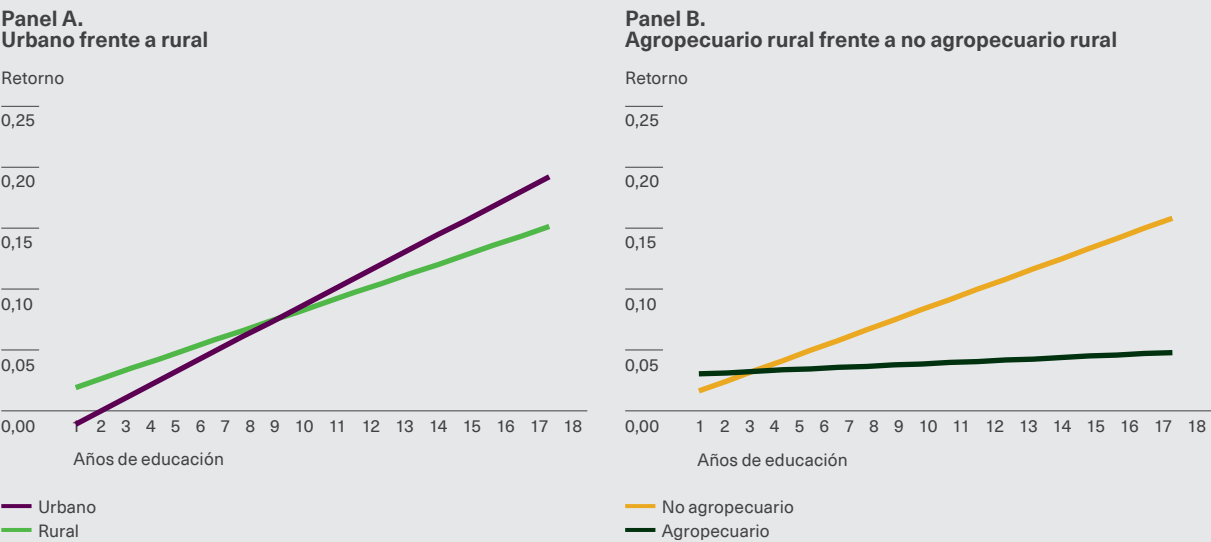
Recuadro 7.3

El rol de los retornos a la educación

El capital humano modera algunos de los contrastes entre los mercados laborales rurales y urbanos. Por ejemplo, en 2023 la participación laboral rural superaba en casi 6 puntos porcentuales a la urbana entre las personas con baja educación, pero la diferencia se reducía a poco menos de 2 puntos entre quienes tenían educación superior completa. Algo similar ocurre con la informalidad: en las zonas rurales desciende del 77 % al 13 % al pasar de los menos a los más educados y la brecha rural-urbana disminuye de 9 a 2 puntos porcentuales.

Sin embargo, cuando se trata de las remuneraciones, el capital humano, lejos de reducir las diferencias, tiende a potenciarlas. El gráfico 1 ilustra que los retornos a la educación aumentan más rápidamente en las zonas urbanas que en las rurales, de modo que la brecha de ingresos entre ambos territorios se amplía a medida que sube el nivel educativo. Dentro de las zonas rurales, la divergencia proviene del sector agropecuario: allí los retornos son prácticamente planos y se mantienen bajos incluso entre quienes alcanzan niveles educativos altos, mientras que crecen con más fuerza en el sector no agropecuario. Esto sugiere que los mercados urbanos y los sectores rurales no agropecuarios concentran actividades de mayor productividad y con mayor capacidad de absorber y recompensar el capital humano. En cambio, en el sector agropecuario, aun cuando las limitaciones estructurales restringen las posibilidades de valorizar la educación formal, otros factores, como el poder del mercado de los empleadores, también pueden contribuir a explicar los bajos retornos observados.

Gráfico 1
Retornos a los años de educación. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Resultados de regresiones estimadas para individuos de entre 25 y 54 años, donde el logaritmo del salario se explica por los años de educación y sus términos cuadráticos, junto con controles de edad y género. En el panel A, el modelo incluye un indicador de zona rural y sus interacciones con la educación y la educación al cuadrado. En el panel B, la muestra se restringe a trabajadores rurales y el modelo incorpora un indicador de pertenencia al sector agropecuario, junto con las interacciones correspondientes.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

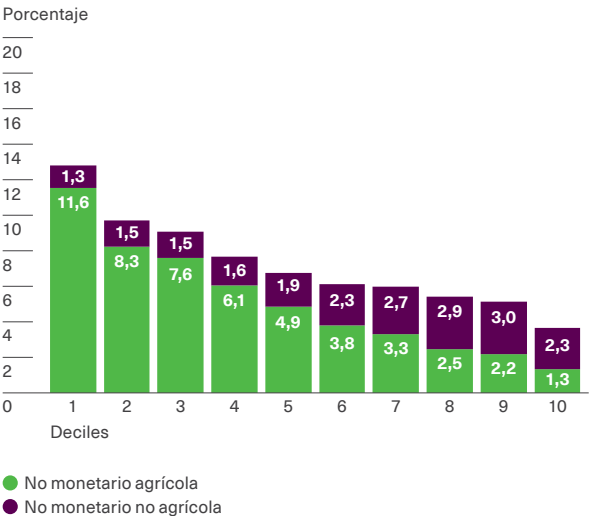
Ingresos laborales no monetarios

En los hogares rurales de ALC, los ingresos no monetarios, como el autoconsumo y las retribuciones en especie, constituyen una fuente relevante de recursos, especialmente entre los hogares vinculados a la agricultura¹⁴. Como se observa en el panel A del gráfico 7.3, representan en promedio el 4 % del ingreso total de los hogares rurales (frente al 2 % en

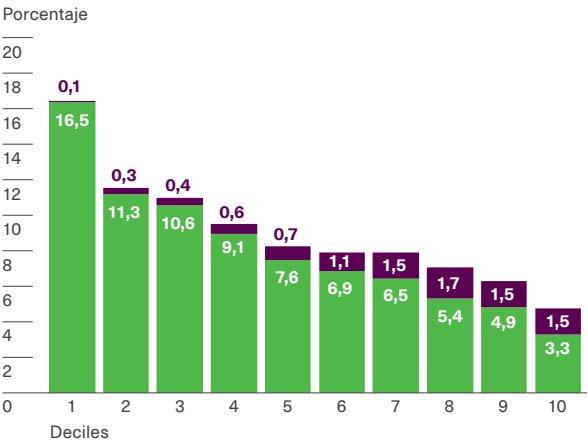
los hogares urbanos), con valores más elevados en los hogares agrícolas y agrícolas independientes (6 % en ambos casos). Su peso relativo es mayor entre los hogares de los deciles más bajos de ingreso, especialmente cuando se mide en relación con los ingresos laborales¹⁵.

Gráfico 7.15
Peso del ingreso laboral no monetario en los ingresos laborales por decil.
Promedio de América Latina y el Caribe, 2023

Panel A.
Hogares rurales



Panel B.
Hogares rurales agrícolas



Nota: La desagregación corresponde a deciles del ingreso total familiar calculados a nivel nacional. Tomando el promedio de los 14 países, los cuatro primeros deciles incluyen al 53 % de los hogares rurales mientras que los cuatro últimos deciles, solo al 26 %. Los hogares agrícolas son aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Los ingresos no monetarios incluyen el valor del autoconsumo y las retribuciones en especie.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

14 Las encuestas de hogares y la base CEDLAS (2025) realizan un esfuerzo sistemático por imputar los ingresos no monetarios. La medición de estos ingresos, provenientes de distintos tipos de relación laboral (patrón, asalariado, cuentapropista u otras formas de empleo). Sin embargo, las estimaciones actuales podrían estar levemente subestimadas, dado que en algunos países no se capturan de manera integral.

15 El gráfico A.7.4 en el apéndice de este capítulo, disponible en la edición en línea del RED, muestra la heterogeneidad existente en ALC en términos del peso relativo de los ingresos no monetarios en los hogares más vulnerables. Allí se observa que Perú y Ecuador son los países donde este tipo de ingresos son una fuente central de las rentas de los hogares rurales más pobres, mucho más alta que en el resto de la región.

El gráfico 7.15 muestra la participación de los ingresos no monetarios dentro de los ingresos laborales por decil de ingreso del hogar. En los hogares rurales, esta participación alcanza el 13 % y 9 % en los deciles 1 y 2, respectivamente (panel A), mientras que en los hogares rurales agrícolas asciende al 17 % y 11 % en los mismos deciles (panel B). Los componentes no monetarios de origen agrícola predominan sobre los no agrícolas, salvo en los deciles superiores de ingreso (panel A). En el caso de los hogares rurales agrícolas (panel B), la importancia de los componentes agrícolas se mantiene elevada en todos los deciles. La base CEDLAS (2025) no distingue entre autoconsumo y pago en especie dentro de los ingresos no monetarios. Sin embargo, el análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) de Perú y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de

México muestra que el autoconsumo es el componente principal, representando alrededor del 85 % de este tipo de ingresos en ambos países. Estos datos muestran que muchos hogares rurales vulnerables y, dentro de ellos, en particular las mujeres (Marchionni et al., 2025), destinan una parte significativa de su tiempo a la producción de subsistencia



En los hogares rurales más vulnerables, la producción para el autoconsumo ocupa una parte importante del tiempo y aporta cerca del 15 % de los ingresos laborales de los hogares agrícolas más pobres

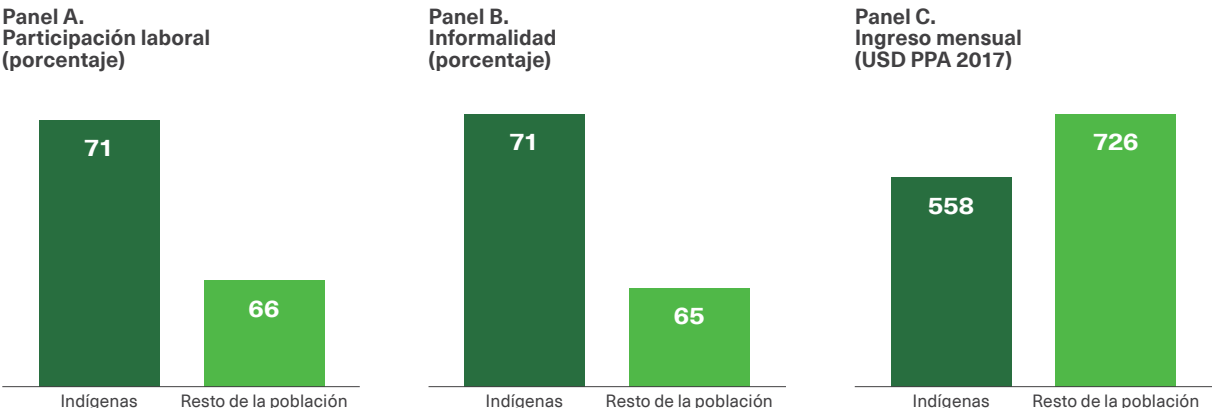
Empleo e ingresos de la población indígena rural

La población indígena constituye un grupo de especial relevancia en las áreas rurales, dado que, como se mostró en el capítulo 6, está sobrerrepresentada en estos territorios. Además, se trata de una población particularmente vulnerable, con mayores tasas de pobreza y privaciones que el resto de la población rural, lo cual se explica en parte por su inserción más limitada y precaria en los mercados de trabajo.

En 2023, las tasas de participación laboral de la población indígena superaban a las del resto de la población rural (panel A del gráfico 7.16). Esta ventaja en términos de inserción, sin embargo, no se traduce en mejores oportunidades: el 71 % de la población indígena rural de entre 25 y 54 años trabaja en condiciones informales, 6 puntos porcentuales por encima de la incidencia de la informalidad para el resto de la población rural (65 %) (panel B). Esta sobrerrepresentación en empleos informales refleja tanto brechas en el capital humano como barreras estructurales y formas persistentes de discriminación en los mercados de trabajo (De la Mata et al., 2022). La desventaja se confirma al considerar los ingresos: como muestra el panel C del gráfico 7.16, los trabajadores rurales indígenas perciben en promedio ingresos mensuales considerablemente inferiores a los de los trabajadores rural no indígenas.

La marcada desventaja de la población indígena rural en términos de calidad del empleo e ingresos está estrechamente vinculada a su mayor dependencia de la agricultura y la producción para el autoconsumo. El caso de Perú ilustra bien este punto. Según la ENAH 2024, el 55 % de los hogares rurales se identifican como indígenas (ya sea el jefe o su cónyuge). Entre ellos, el 91 % son agrícolas y el 86 % de estos corresponden a hogares agrícolas independientes. En contraste, entre los hogares rurales no indígenas, el 87 % son agrícolas y el 75 %, agrícolas independientes. Los hogares indígenas dedicados de manera independiente a la agricultura manejan, en promedio, mayores extensiones de tierra que sus pares no indígenas (8,13 hectáreas frente a 2,75), aunque con menor frecuencia son propietarios o arrendatarios. Asimismo, muestran una mayor dependencia del autoconsumo, que representa el 18 % de su ingreso total frente al 16 % en los hogares no indígenas. Si bien esta producción asegura una base mínima de sustento, también incrementa la vulnerabilidad de estos hogares frente a choques productivos y climáticos, reforzando las desventajas ya señaladas en términos de ingresos.

Gráfico 7.16
Indicadores laborales de la población indígena en zonas rurales. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Promedio simple calculado sobre seis países: Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El grupo de comparación corresponde a blanco y mestizo, entre otros, pero no incluye afrodescendientes. Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. El ingreso se estima en dólares a paridad de poder adquisitivo (PPA).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Políticas públicas para el empleo y la protección social en el mundo rural

Aunque la pobreza rural ha disminuido en las últimas dos décadas, la vulnerabilidad de los hogares, especialmente los agrícolas e independientes, sigue siendo alta. Persisten la informalidad laboral, la baja diversificación de las fuentes de ingresos y las

brechas por género y etnicidad. Ante este contexto, las políticas públicas deben enfocarse en reducir la vulnerabilidad y promover una inclusión social y productiva integral.

Políticas de protección social

Transferencias de ingresos

El fortalecimiento de las políticas de protección de ingresos es un eje prioritario para mejorar las condiciones de los hogares rurales. En las últimas

tres décadas, las políticas de sostenimiento de los ingresos se han expandido y consolidado en ALC, convirtiéndose en un componente central de los sistemas de protección social (Álvarez et al., 2025; Cecchini y Atuesta, 2017; Stampini et al., 2025).



Pesca artesanal en Monteverde, Ecuador.

Una de las principales herramientas son los programas de transferencias condicionadas, actualmente vigentes en 19 países de la región (CEPAL, 2025a). Las condicionalidades están usualmente vinculadas a la asistencia escolar y los controles de salud, y, al promover la acumulación de capital humano en niños y jóvenes, buscan romper con los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza (De la Mata et al., 2022).



Aunque las transferencias de ingresos podrían desincentivar la participación laboral, la evidencia muestra que sus efectos son mínimos o incluso van en la dirección contraria en entornos rurales

Entre 2003 y 2023, las transferencias estatales, incluidas las transferencias condicionadas de ingreso, pasaron de representar en promedio un 1,3 % a un 4,3 % del ingreso total de los hogares rurales en la región¹⁶. El crecimiento más acelerado ocurrió entre 2003 y 2013. Como era de esperar, la importancia relativa de estas transferencias es mayor en los deciles más bajos, alcanzando el 24 % en los hogares del decil 1 y el 14 % en los del decil 2, lo que se observa en el panel A del gráfico 7.5. Un ejercicio contrafactual que compara la tasa de pobreza observada con la tasa de pobreza hipotética resultante de restar a los ingresos de los hogares los obtenidos por transferencias del Estado, muestra que la tasa de pobreza en áreas rurales habría sido 3,3 puntos porcentuales más alta que la observada en ausencia de estas transferencias¹⁷.

La amplia evidencia para la región, basada en evaluaciones de impacto, muestra la relevancia de las transferencias condicionadas para reducir la

vulnerabilidad rural estructural, mejorando la educación y la salud infantil (Barham et al., 2024; Cecchini et al., 2021; Laguinde et al., 2025; Millán et al., 2019; Parker y Vogl, 2023; Stampini et al., 2025). Un efecto no deseado de este tipo de políticas es el desincentivo a la participación laboral y al trabajo formal. Sin embargo, la evidencia para países en desarrollo mayoritariamente muestra impactos poco significativos sobre la oferta laboral (Banerjee et al., 2017). Diversos estudios en entornos rurales de América Latina y el Caribe confirman esta conclusión. En algunos casos los efectos van incluso en el sentido opuesto. Por ejemplo, Vera-Cossio (2022) muestra que la recepción del bono Juancito Pinto en Bolivia incrementó la participación laboral del jefe del hogar y su cónyuge. Otros efectos positivos documentados en México incluyen el incentivo a inversiones productivas de hogares rurales (Gertler et al., 2012) y una mayor inclusión financiera (Masino y Niño-Zarazúa, 2020).

Pensiones no contributivas

Otro componente de las políticas de sostenimiento de ingresos son las pensiones no contributivas. Una proporción significativa de la población llega a la vejez sin cumplir los requisitos para acceder a una pensión contributiva, lo que las deja en situación de vulnerabilidad económica (Álvarez et al., 2020). Este problema afecta especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas, debido a su menor inserción en el empleo formal, como se vio anteriormente. Un ejercicio contrafactual en el que se compara la tasa de pobreza observada con la tasa de pobreza hipotética resultante de restar a los ingresos de los hogares los ingresos que obtienen por pensiones no contributivas, muestra que estas desempeñan también un papel relevante en la reducción de la pobreza rural: si se eliminara este componente de los ingresos, la pobreza sería

16 Las transferencias estatales incluyen las transferencias condicionadas, en especie y otras transferencias sociales corrientes no contributivas (como asignaciones familiares y subsidios de desempleo no contributivos) y excluyen las pensiones.

17 Este ejercicio es meramente descriptivo: asume que el comportamiento de los hogares no se ve alterado ante la eliminación de la transferencia, por lo que no debe interpretarse como el efecto causal de los programas de transferencia. El gráfico A.7.5 y el cuadro A.7.1 del apéndice 7, disponible en la edición en línea del RED, muestran estos resultados para el promedio de ALC y para cada país en áreas rurales y urbanas. La contribución de las transferencias a la reducción de la pobreza rural en Brasil es alta tanto en términos absolutos (en puntos porcentuales) como relativos (variación porcentual). En Chile y Uruguay, pese a que los cambios absolutos son bajos, en términos relativos presentan una variación importante. En el resto de los países la contribución es entre moderada (Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana) y baja (Bolivia, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú). En algunos países, la contribución es menor que en las áreas urbanas.

en promedio 2,5 puntos porcentuales más alta en las áreas rurales¹⁸.

La evidencia de evaluaciones de impacto indica que estas pensiones han mejorado el bienestar de la población rural, reduciendo la pobreza extrema. En el caso de México (Programa 70 y Más), Ávila Parra et al. (2024) muestran efectos especialmente significativos en áreas rurales y entre la población indígena. Asimismo, estudios en Paraguay (Bando et al., 2020) y en México (Galiani et al., 2016) evidencian mejoras en la salud de los adultos mayores residentes en zonas rurales. Bottan et al. (2021) analizaron el rol de un programa de pensiones no contributivas casi universal en Bolivia durante la pandemia de COVID-19. Sus resultados destacan el papel asegurador de estas transferencias, así como su eficacia para aumentar la resiliencia financiera y reducir la inseguridad alimentaria tanto en hogares pobres como en hogares vulnerables.

Las pensiones no contributivas también permiten que los adultos mayores se retiren, al menos parcialmente, de actividades productivas. En México, Juárez y Pfutze (2015) encuentran que las pensiones para mayores de 70 años redujeron la oferta laboral de los hombres, aunque no la de las mujeres. De manera importante, el mismo estudio muestra que estas transferencias no desincentivan la oferta laboral de la población en edad de trabajar que convive con los beneficiarios y, además, favorecen que los jóvenes de 15 a 17 años reduzcan su participación laboral, con el potencial de extender su formación. En Bolivia, Canelas y Niño-Zarazúa (2022) hallan que el programa Renta Dignidad no tuvo efectos negativos en la participación laboral de los adultos en hogares beneficiarios. Finalmente, en Brasil, la expansión de las pensiones no contributivas para mujeres en la década de 1990 generó efectos positivos en la participación laboral femenina (Khanna et al., 2025).

Desafíos para robustecer las políticas de sostenimiento de ingresos

Aún persisten desafíos significativos en materia de cobertura, suficiencia y focalización en las políticas de sostenimiento de ingresos. Existen múltiples razones por las cuales estos programas no logran abarcar a todos los hogares pobres (Banerjee et al., 2024). Muchos todavía carecen de la escala necesaria. Además, los mecanismos de focalización y selección de beneficiarios suelen presentar limitaciones que derivan tanto en la exclusión de hogares pobres como en la inclusión de hogares no pobres. Finalmente, ciertos hogares pobres resultan especialmente difíciles de alcanzar debido a barreras estructurales, como la lejanía geográfica, la falta de acceso a servicios básicos (requeridos para cumplir con los requisitos en el caso de las transferencias condicionadas de ingreso), la desinformación o la desconfianza hacia las instituciones públicas (Robles et al., 2019). Estas barreras estructurales parecen más altas para la población indígena, como documentan Bauchet et. al (2018) en el caso de Bolivia.

Por último, se suma el desafío del monto de los beneficios, que no siempre permiten superar la línea de pobreza, limitando de este modo el impacto de las políticas públicas. En ausencia de una protección de ingresos suficiente y efectiva, las familias rurales continúan dependiendo en gran medida de las transferencias privadas (remesas, apoyo de familiares o redes comunitarias), que constituyen un pilar central de sus estrategias de subsistencia, como se analiza en el recuadro 7.4.

18 El cuadro A.7.1 del apéndice 7, disponible en la edición en línea del RED, muestra el mismo ejercicio para cada país.

Recuadro 7.4

Transferencias privadas

Las transferencias privadas, especialmente las remesas, cumplen un rol importante en las economías de ALC, en particular para los hogares más vulnerables (Vacaflares, 2018). Según datos de CEDLAS (2025), estas transferencias representan en promedio para la región el 16 % de los ingresos de los hogares en los tres deciles más bajos, un valor levemente inferior al observado en áreas urbanas (20 %).

Las transferencias privadas actúan como mecanismos de autoaseguramiento frente a choques, supliendo la falta de protección estatal y el acceso limitado al crédito. En el caso de México, Amuedo-Dorantes y Juárez (2015) muestran que la recepción de pensiones no contributivas sustituye la de transferencias privadas.

Asimismo, estas transferencias contribuyen a reducir la vulnerabilidad, mejorar la educación y el acceso a la salud (Askarov y Doucouliagos, 2020; Edwards y Ureta, 2003) e influyen en la participación laboral y en las decisiones productivas de los hogares (Adams y Cuenca, 2010; Amuedo-Dorantes y Pozo, 2006).

Existe una importante vinculación entre la inclusión financiera y la recepción de transferencias privadas. Las barreras a la inclusión financiera de los hogares rurales, documentadas en el capítulo 8, pueden limitar la capacidad para recibir este tipo de recursos provenientes de familiares que migran a otras localidades o países (FIDA y Banco Mundial, 2015).

Transferencias en especie

Dentro del conjunto de políticas de sostenimiento de ingresos, las transferencias en especie (por ejemplo, la entrega directa de alimentos) ofrecen ciertas ventajas frente a las monetarias. Por un lado, contribuyen a mejorar la nutrición, ya que los hogares tienden a consumir los productos recibidos, lo que incrementa la ingesta de calorías y micronutrientes (Cunha, 2014; Leroy et al., 2010). Por otro lado, pueden generar efectos positivos en los mercados locales: en zonas remotas, reducen los precios de los bienes básicos para toda la población, no solo para los beneficiarios (Cunha et al., 2019). Esto se debe a que, en contextos con escaso acceso a mercados y baja competencia entre proveedores, la provisión directa del Estado introduce competencia, como muestran Michelson et al. (2012) y Jiménez Hernández y Seira (2022).

Políticas de protección social productivas

Una visión ampliada de la protección social plantea que, para que la población en situación de pobreza logre superar esta condición, es necesario articular las medidas de protección con las estrategias de inclusión económica. Las experiencias en la región son diversas y sus resultados heterogéneos.

Por un lado, existe evidencia alentadora sobre la efectividad de los programas de transferencias de activos productivos, especialmente cuando se complementan con componentes habilitadores, como la capacitación y el acompañamiento técnico. Estos programas han mostrado impactos positivos, en particular entre las mujeres (Bandiera et al., 2017; Banerjee et al., 2015, 2024). La literatura destaca que superar una de las principales restricciones (el acceso a activos) constituye un paso decisivo para romper las trampas de pobreza.

Por otro lado, también se han impulsado numerosos esfuerzos para el emprendimiento entre hogares pobres rurales. Sin embargo, la evidencia sugiere cautela: los programas de desarrollo empresarial muestran resultados dispares y difíciles de generalizar. Por ejemplo, Carter et al. (2019) encuentran efectos positivos del Programa de Desarrollo Rural de Nicaragua, aunque significativamente menores entre los hogares más pobres¹⁹. Esto indica que no toda la población está en condiciones de emprender con éxito, ya que esto requiere habilidades específicas que deben desarrollarse o estar previamente adquiridas (Sanguinetti et al., 2013). En el sector agropecuario, un diseño inadecuado de estos programas puede incluso reforzar problemas estructurales, como la

baja productividad y la pequeña escala de muchas unidades, especialmente de la economía familiar de subsistencia (como se analiza en los capítulos 2 y 3), y desincentivar la transición hacia sectores más productivos.



El emprendimiento rural no siempre es una vía de inclusión: sus resultados son dispares y, sin un diseño adecuado, puede reforzar las desigualdades existentes

Regulaciones laborales

La organización sindical y la negociación colectiva pueden mejorar las condiciones laborales en el medio rural, pero su impacto ha sido limitado en la práctica. La dispersión geográfica, la subcontratación y la informalidad diluyen la relación directa entre empleador y trabajador, dificultando tanto la sindicalización como la negociación colectiva efectiva (Weller et. al, 2016).

Un caso destacado es Uruguay, donde se han logrado avances significativos en la institucionalización de la negociación colectiva rural. A diferencia de otros países, el agro uruguayo tuvo una temprana expansión del trabajo asalariado (Riella y Mascheroni, 2019). En 2023, el 51 % del empleo agropecuario estaba cubierto por personas asalariadas y, de ellas, el 90 % estaban registradas, la mayor proporción de la región.

Desde 2005, se implementaron mecanismos de negociación colectiva rural con la participación de trabajadores, empleadores y el Estado, lo que permitió establecer la jornada laboral de ocho horas y limitar la tercerización, mejorando las condiciones

laborales en el sector. Aunque no hay evaluaciones rigurosas del impacto, la evidencia sugiere mejoras en los salarios mínimos y reducción de las horas trabajadas.

En paralelo, las regulaciones laborales en el medio rural también enfrentan el desafío del trabajo infantil, que continúa siendo más prevalente en el agro que en otros sectores económicos. La OIT (2021) estima que cerca del 50 % del trabajo infantil en ALC se concentra en el sector agropecuario, muchas veces en condiciones peligrosas o que interfieren con la asistencia escolar. Si bien varios países han fortalecido los marcos legales y los sistemas de inspección laboral para prevenir y sancionar el trabajo infantil, la dispersión geográfica y los altos niveles de informalidad limitan su efectividad.

¹⁹ Los pequeños productores debían presentar un plan de negocios, recibían capacitación técnica y financiera, así como insumos acordes con su plan de negocios individual. También accedían a beneficios de cofinanciamiento (subsidios parciales para insumos agrícolas mejorados, costos compartidos para equipos o instalaciones de propiedad individual o cooperativa).

Políticas activas del mercado laboral

El fortalecimiento de las políticas activas del mercado laboral puede contribuir a reducir fricciones que limitan el acceso a empleos de calidad en áreas rurales, donde la dispersión geográfica y la alta informalidad dificultan tanto la búsqueda de empleo como la identificación de candidatos calificados.

Diversos instrumentos pueden contribuir a aliviar estas fricciones, como las bolsas de empleo, la asistencia en la búsqueda laboral, los programas de pasantías, la formación y la certificación de habilidades. La evidencia destaca el alto potencial de estas intervenciones en países en desarrollo, especialmente cuando se focalizan en jóvenes y poblaciones vulnerables (Berniell y de la Mata, 2017; Carranza y McKenzie, 2024; Escudero et al., 2019; Ibararán et al., 2019; Le Barbanchon et al., 2023; Novella y Valencia, 2022). Sin embargo, Maïga et al. (2020) destacan la necesidad de generar mayor evidencia del impacto de los programas de fortalecimiento de las habilidades en agricultura para jóvenes.

En ALC, estas políticas se pueden reforzar si se articulan con sectores de alto potencial para la diversificación del empleo rural, como las cadenas agroalimentarias (Berdegué et al., 2025) tanto en el sector primario como en sus eslabonamientos posteriores, servicios rurales, y con otros sectores estratégicos (turismo, pesca, minería y sector forestal), que se discuten en los capítulos previos. También, la promoción de empleos “verdes”, muchos de los cuales

se localizan en áreas rurales, resulta especialmente relevante en el marco de la transición energética y de los esfuerzos por reducir las emisiones de GEI (Allub et al., 2024)²⁰. Un ejemplo de ello son las iniciativas de algunos gobiernos locales que, a través de programas de transferencias, impulsan la restauración de ecosistemas como forma de protección social productiva para pequeños productores agrícolas durante los periodos entre cosechas.



Las políticas activas del mercado laboral se pueden reforzar si se articulan con sectores de alto potencial para la diversificación del empleo rural

En este marco, los programas de capacitación y reconversión laboral resultan fundamentales para adecuar la fuerza de trabajo a las nuevas demandas del mercado. Estos sectores ofrecen oportunidades relevantes para mejorar los ingresos y diversificar el empleo rural, pero su aprovechamiento suele requerir una reconversión de las capacidades de los trabajadores. La evidencia en la región muestra que las políticas de formación en el aula, en el puesto de trabajo o mediante esquemas combinados han tenido efectos positivos (Escudero et al., 2019).

Educación postsecundaria

Dentro de las estrategias para promover la diversificación del empleo rural, resulta particularmente relevante expandir el acceso a educación postsecundaria, actualmente muy limitada en contextos rurales. La expansión estratégica de instituciones públicas y

de programas de formación de ciclo corto, como tecnicaturas, programas tecnológicos o certificaciones, ha demostrado potencial para aumentar la matrícula en zonas geográficamente desatendidas (Bassi et al., 2021; Ferreyra, 2017). Sin embargo, este tipo de oferta

²⁰ La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define los empleos verdes como “trabajos decentes que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, ya sea en sectores tradicionales, como la manufactura y la construcción, o en nuevos sectores verdes emergentes, como las energías renovables y la eficiencia energética”. Los empleos verdes ayudan a mejorar la eficiencia energética y de las materias primas; reducen las emisiones de gases de efecto invernadero; disminuyen los residuos y la contaminación; protegen y restauran los ecosistemas; y apoyan la adaptación al cambio climático.

sigue siendo escasa en la mayoría de los países de la región, con la destacada excepción de Colombia (Ferreira et al., 2022).

La pertinencia de los programas de educación post-secundaria es fundamental, lo que exige un análisis prospectivo de la demanda laboral adaptado a los contextos locales. Por ejemplo, el fortalecimiento de la oferta educativa para preparar a la fuerza laboral frente a las nuevas exigencias de los empleos verdes constituye un área de gran oportunidad, cuyo aprovechamiento requiere ser evaluado en cada región

según sus características productivas y ambientales. La formación técnica en determinados campos, como las energías renovables, la gestión de recursos naturales, la eficiencia energética o las tecnologías de la información aplicadas a la producción agropecuaria, representa una vía estratégica para articular la agenda educativa con la transición energética y el desarrollo sostenible en las zonas rurales. No obstante, la oferta educativa también debe adaptarse a las oportunidades locales que ofrecen otros sectores tanto agropecuarios como no agropecuarios.

Políticas para reducir brechas de género

Reducir las brechas de género en el empleo y los ingresos en zonas rurales requiere enfrentar las barreras estructurales vinculadas a la maternidad y los cuidados, las normas de género tradicionales y las limitadas oportunidades laborales de calidad para las mujeres, como documentan Marchionni et al. (2025).

Si bien como se documenta en el capítulo 6 el número de hijos por mujer viene reduciéndose en zonas rurales, la fecundidad sigue siendo más alta que en áreas urbanas. Una prioridad es ampliar la cobertura de servicios de cuidado infantil y educación inicial. La evidencia muestra que estos servicios pueden mejorar los resultados laborales de las mujeres al facilitar su inserción en el empleo, permitir la transición hacia ocupaciones más deseables o incrementar la productividad de sus negocios. Sin embargo, cuando persisten obstáculos adicionales, como normas sociales restrictivas o falta de empleos de calidad, el cuidado infantil por sí solo no es suficiente para cerrar las brechas (J-PAL, 2023).

Marchionni et al. (2025) destacan también que una de las principales limitaciones para las mujeres rurales es el tiempo destinado a tareas domésticas no remuneradas distintas al cuidado, como la producción para el autoconsumo o el abastecimiento de agua. Por ello, la inversión en infraestructura básica (agua, energía, transporte) y en tecnologías que ahorren tiempo resulta esencial para aliviar esta carga y ampliar sus oportunidades laborales.



Reducir las brechas de género en el empleo y los ingresos en las zonas rurales requiere enfrentar las barreras estructurales vinculadas a la maternidad y los cuidados, las normas de género tradicionales y las limitadas oportunidades laborales de calidad para las mujeres

Otro eje fundamental son los programas de formación técnica con enfoque de género, junto con acciones afirmativas que promuevan la participación femenina en sectores estratégicos tradicionalmente masculinizados, como la agroindustria, la pesca o la construcción. Asimismo, las políticas de inclusión financiera deben ser transversales para toda la población rural, pero adquieren especial relevancia en el caso de las mujeres, quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

Finalmente, las políticas deben acompañarse de iniciativas que transformen las normas sociales. Campañas de sensibilización y programas educativos con perspectiva de género, orientados a modificar estereotipos sobre los roles económicos y familiares de las mujeres rurales, son clave para consolidar los avances y contribuir a cerrar las brechas.

Políticas habilitadoras para favorecer mejores condiciones laborales

En muchos casos, las oportunidades laborales existen en poblados o localidades cercanas, pero los costos de transporte, la baja calidad de la infraestructura de conectividad y la ausencia de servicios de movilidad imponen barreras significativas para que los trabajadores rurales puedan acceder a ellas. Estas barreras reducen, en la práctica, las posibilidades de aprovechar las oportunidades laborales disponibles.

Las políticas de infraestructura tanto en caminos y transporte como en conexiones digitales constituyen factores habilitadores clave para mejorar las condiciones de inserción laboral en el mundo rural y reducir las brechas de conectividad. La evidencia empírica, documentada en el capítulo 8, muestra de manera consistente que las inversiones en infraestructura de conexión física y digital tienen impactos positivos sobre el empleo rural al reducir los costos de búsqueda, facilitar el acceso a mercados más amplios y ampliar el rango de oportunidades disponibles para los trabajadores y emprendedores.